TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS

ASUNTO MARGUŠ CONTRA CROACIA (Demanda núm. 4455/10)

GRAN SALA

SENTENCIA DE 27 DE MAYO DE 2014

[Extractos¹]

1. El presente documento contiene extractos de la sentencia dictada por la Gran Sala en el asunto *Marguš contra Croacia*. Incluye asimismo un resumen de la misma que no vincula al Tribunal. El texto íntegro de la sentencia en inglés puede consultarse en la base de datos HUDOC en: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-144276>. Aparte de las versiones oficiales de esta sentencia en inglés y en francés, HUDOC proporciona acceso a una selección de sentencias traducidas al español: <http://hudoc.echr.coe.int>.

RESUMEN¹

Condena a un soldado por crímenes de guerra al que previamente se le había concedido una amnistía

Existe una tendencia creciente en el derecho internacional que considera inaceptable la amnistía por actos que suponen violaciones graves de los derechos humanos fundamentales, como es el asesinato intencionado de civiles, al ser incompatible con la obligación universalmente reconocida para los Estados de perseguir y condenar dichos actos. En consecuencia, el artículo 4 del Protocolo núm. 7 al Convenio, que establece el derecho a no ser juzgado o condenado dos veces, no es de aplicación al supuesto en que un acusado al que se le haya concedido una amnistía en relación con los delitos tipificados en la legislación penal ordinaria, sea sido declarado culpable por crímenes de guerra derivados de los mismos hechos (véanse párrafos 129 a 138 de la sentencia).

Artículo 4 del Protocolo núm. 7

Derecho a no ser juzgado o condenado dos veces – Condena por crímenes de guerra a un soldado al que previamente se le había concedido una amnistía – Creciente tendencia en el derecho internacional a no aceptar la concesión de amnistías en relación con delitos que suponen graves violaciones de los derechos humanos

*

* *

Hechos

El demandante, miembro del ejército croata, fue acusado de asesinato y de otros delitos graves cometidos en 1991 durante la guerra en Croacia. Algunos de los cargos fueron retirados posteriormente. En 1997, el tribunal de primera instancia dio por finalizado el proceso en relación con los restantes cargos de conformidad con la Ley de Amnistía General, que concedía la amnistía con respecto a todos aquellos delitos cometidos en relación con la guerra en Croacia entre 1990 y 1996, a excepción de aquellos actos constitutivos de los delitos más graves en derecho humanitario o crímenes de guerra. En 2007, el Tribunal Supremo en respuesta a una petición para la protección de la legalidad interpuesta por el Abogado del Estado, determinó que la decisión de dar por finalizado el proceso contra el demandante infringía la Ley de Amnistía General. En particular señaló que el demandante había cometido los hechos presuntamente delictivos en su condición de miembro de las

1. Este resumen de la Secretaría no es vinculante para el Tribunal.

fuerzas de reserva después de que su período de servicio hubiera finalizado, por lo que no existía un nexo significativo entre los delitos presuntamente cometidos y la guerra, tal y como requería la citada Ley. Por otra parte, el demandante fue acusado de crímenes de guerra en el marco de un segundo procedimiento. El tribunal de primera instancia declaró culpable al demandante de crímenes de guerra y lo condenó a catorce años de prisión. El Tribunal Supremo confirmó en apelación la condena impuesta, entre otros motivos, por la ausencia de cosa juzgada, toda vez que el marco de antecedentes fácticos a analizar para la determinación de los delitos en el segundo procedimiento era mucho más amplio de lo que había sido en el primero. Ello, teniendo en cuenta que el demandante había sido acusado de violar el derecho internacional, en particular, la Convención de Ginebra relativo a la Protección debida a las Personas Civiles en Tiempos de Guerra. El demandante interpuso un recurso ante el Tribunal Constitucional que fue desestimado.

Fundamentos de derecho

El artículo 4 del Protocolo núm. 7: El demandante se quejó de la violación de su derecho a no ser juzgado dos veces. El Tribunal reconoció que en ambos procedimientos el demandante había sido procesado por los mismos delitos. Sin embargo, se dieron dos circunstancias distintas en lo relativo a los cargos formulados en el primer procedimiento: el fiscal retiró los cargos relativos a la muerte de dos personas, mientras que los procedimientos resultantes de los cargos por la muerte de otras dos personas y del cargo por lesiones graves finalizaron mediante una decisión del Tribunal del Condado en base a la Ley de Amnistía General.

a. *Retirada de los cargos* – En relación con los cargos que fueron retirados por el fiscal en el primer procedimiento, el Tribunal reiteró que la retirada de cargos por el fiscal en un procedimiento penal no equivalía a una condena o a una absolución, de tal forma que el artículo 4 del Protocolo núm. 7 no era aplicable.

Conclusión: inadmisibles (por unanimidad).

b. *Finalización del procedimiento por aplicación de la Ley de Amnistía General* – En cuanto a la finalización del primer procedimiento por aplicación de Ley de Amnistía General, el Tribunal observó que al demandante se le había concedido indebidamente una amnistía por actos que podían considerarse violaciones graves de los derechos humanos fundamentales protegidos por los artículos 2 y 3 del Convenio. Los Estados tienen la obligación de perseguir penalmente actos como la tortura y el asesinato. Por otra parte, se observa una tendencia creciente en el derecho internacional a considerar inaceptable la concesión de amnistías con respecto a delitos graves contra los derechos humanos. En apoyo a esta observación, el Tribunal invocó varios organismos, tribunales y convenciones internacionales, entre ellas, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Además, incluso si se aceptara que las amnistías son aceptables bajo

determinadas circunstancias particulares, como un proceso de reconciliación y/o una forma de compensación a las víctimas, la amnistía concedida al demandante no podía ser aceptada ya que, en el presente caso, no había nada que indicase que se hubieran dado tales circunstancias. El nuevo escrito de acusación contra el demandante por crímenes de guerra en el segundo procedimiento cumplía pues con las obligaciones establecidas en los artículos 2 y 3 del Convenio, de forma que el artículo 4 del Protocolo núm. 7 no era aplicable.

Conclusión: El artículo 4 del Protocolo núm. 7 no aplicable (dieciséis votos contra uno).

SENTENCIA

En el asunto *Marguš contra Croacia*,

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, constituido en una Gran Sala compuesta por:

Dean Spielmann, *Presidente*,

Josep Casadevall,

Guido Raimondi,

Ineta Ziemele, *Juez ad hoc*,

Mark Villiger,

Isabelle Berro-Lefèvre,

Corneliu Bîrsan,

Ján Šikuta,

Ann Power-Forde,

Işıl Karakaş,

Nebojša Vučinić,

Kristina Parldalos,

Angelika Nußberger,

Helena Jäderblom,

Krzysztof Wojtyczek,

Faris Vehabović,

Dmitry Dedov, *Jueces*,

y Lawrence Early, *Jurisconsulto*,

...

Dicta la siguiente sentencia. ...

PROCEDIMIENTO

1. El asunto tiene su origen en una demanda (núm. 4455/10) contra la República de Croacia, presentada ante el Tribunal por un ciudadano croata, el señor Fred Marguš (“el demandante”), en virtud del artículo 34 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (“el Convenio”) el 31 de diciembre de 2009.

2. El demandante, al que se le había concedido asistencia jurídica gratuita, ha estado representado ante el Tribunal por el Sr. P. Sabolić, abogado ejerciente en Osijek. El Gobierno croata (“el Gobierno”) está representado por su agente, la Sra. Š. Stažnik.

...

HECHOS

I. CIRCUNSTANCIAS DEL CASO

12. El demandante nacido en 1961, se encuentra actualmente cumpliendo condena en la Prisión Estatal de Lepoglava.

A. Primer procedimiento iniciado contra el demandante (núm. K-4/97)

13. El 19 de diciembre de 1991, el departamento de policía de Osijek presentó una denuncia contra el demandante y otras cinco personas ante el Tribunal del Condado de Osijek alegando que el demandante, miembro del ejército croata, había matado a varios civiles.

14. El 20 de abril de 1993, el Fiscal Militar de Osijek acusó al demandante ante el Tribunal del Condado de Osijek de la comisión de los delitos de asesinato, de infligir lesiones corporales graves, de causar un riesgo para la vida y los bienes, y de robo. La parte relevante del acta de acusación establece:

“el primer acusado, Fred Marguš

1. El 20 de noviembre de 1991 sobre las 7 de la mañana en la ciudad de Čepin... disparó cuatro veces a S.B., con un arma automática... causando la muerte de S.B.;

...

2. En la fecha y lugar señalados en el apartado (1)... disparó varias veces a V.B. con un arma automática... causando la muerte de V.B.;

...

3. El 10 de diciembre de 1991 llevó a N.V. al bosque ‘Vrbik’, entre las ciudades de Čepin e Ivanovac... y le disparó dos veces con un arma automática... causando la muerte de N.V.;

...

4. En la fecha y lugar señalados en el apartado (3), disparó a Ne.V., con un arma automática... causando su muerte;

...

6. El 28 de agosto de 1991 sobre las 3 de la madrugada, lanzó un artefacto explosivo en los locales comerciales de Čepinski Martinovec... causando daños materiales;

...

7. El 18 de noviembre de 1991 a las 00.35 de la madrugada., colocó un artefacto explosivo en una casa en la ciudad de Čepin... causando daños materiales;

...

8. El 1 de agosto de 1991 a las 3.30 de la tarde, en la ciudad de Čepin... disparó a R.C., causándole lesiones corporales leves y luego... pateó a V.Ž... provocándole lesiones corporales graves... y también pateó a R.C.,... causándole lesiones leves...;

...

9. Entre el 26 de septiembre y 5 de octubre de 1991 en la ciudad de Čepin... robó varias armas y munición...;

...”

Además, fue acusado por la apropiación indebida de varios tractores y otras máquinas que pertenecían a otras personas.

15. El 25 de enero de 1996, el Fiscal Militar adjunto de Osijek retiró los cargos establecidos en los apartados 3, 4, 6, 7 y 9 del escrito de acusación, así como los cargos por apropiación indebida de bienes pertenecientes a otras personas. Se incluyó un nuevo cargo, en virtud del cual el demandante fue acusado de haber disparado en la ciudad de Čepin, el 20 de noviembre de 1991 sobre las 7 de la mañana a un niño, SI.B., causándole lesiones corporales graves. El antiguo apartado 8 del acta de acusación pasó a ser el apartado 4.

16. El 24 de septiembre de 1996, se promulgó la Ley de Amnistía General, la cual preveía la aplicación de una amnistía general a todos los delitos cometidos en la guerra de Croacia entre el 17 de agosto de 1990 y el 23 de agosto de 1996, salvo aquellos delitos relacionados con actos que hubieran supuesto las violaciones más graves del derecho humanitario o constituyeran crímenes de guerra, incluyendo el delito de genocidio (véase párrafo 27 *infra*).

17. El 24 de junio de 1997, el Tribunal del Condado de Osijek, reunido bajo la presidencia del juez M.K., finalizó el procedimiento en aplicación de lo dispuesto en la Ley de Amnistía General. El fragmento relevante de esta decisión disponía:

“El Tribunal del Condado de Osijek... ha decidido el 24 de junio de 1997 lo siguiente: que el procedimiento penal seguido contra el acusado Fred Marguš por dos cargos de asesinato... por infligir lesiones corporales graves...y por causar un riesgo para la vida y los bienes...establecidos en el acta de acusación presentado por la Fiscalía Estatal del Condado de Osijek... el 10 de febrero de 1997, ha de finalizarse en virtud de los artículos 1 (1), 1 (3), y 2(2) de la Ley de Amnistía General.

...

Fundamento

El escrito de acusación de la Fiscalía Estatal Militar de Osijek núm. Kt-1/93 de 20 de abril de 1993 acusaba a Fred Marguš de la comisión de tres delitos de asesinato en virtud del artículo 35.1 del Código Penal; un delito de asesinato en virtud del artículo 35.2(2) del Código Penal; dos delitos de causar un riesgo para la vida y los bienes... en virtud del artículo 153.1 del Código Penal; un delito de lesiones corporales graves en

virtud del artículo 41.1 del Código Penal; un delito de robo de armas u otros equipos armamentísticos en virtud del artículo 233.1 y 233.2 del Código Penal; y un delito de robo agravado en virtud del artículo 131.2 del Código Penal...

El precitado escrito de acusación fue modificado significativamente en una audiencia celebrada el 25 de enero de 1996 ante el Tribunal Militar de Osijek, durante la cual el Fiscal Militar Adjunto retiró algunos de los cargos y modificó la descripción fáctica y jurídica, así como la calificación jurídica de algunos de los delitos.

De este modo, el acusado Fred Marguš fue acusado de dos delitos de asesinato en virtud del artículo 34.1 del Código Penal; un delito de lesiones corporales graves en virtud del artículo 41.1 del Código Penal y un delito de causar un riesgo a la vida y los bienes... en virtud del artículo 146.1 del Código Penal...

Después de que los Tribunales Militares fueran abolidos, el expediente fue remitido a la Fiscalía Estatal del Condado de Osijek, que se hizo cargo de la acusación por los mismos cargos y solicitó que el procedimiento continuara ante el Tribunal del Condado de Osijek. Éste último remitió el expediente a un panel compuesto por tres jueces, en virtud de lo establecido en la Ley de Amnistía General.

Después de examinar el expediente del caso, este panel ha concluido que las condiciones establecidas por los artículos 1.1 y 1.3, así como en el artículo 2.2 de la Ley de Amnistía General, se cumplían y que por tanto, el acusado no estaba excluido de la amnistía.

La precitada Ley establece una amnistía general en relación con los delitos cometidos durante la agresión, rebelión armada o conflictos armados... en la República de Croacia. La amnistía general se refiere a los delitos cometidos entre el 17 de agosto de 1990 y el 23 de agosto de 1996.

La amnistía general excluye únicamente a los autores de las violaciones más graves del derecho humanitario que constituyen crímenes de guerra, y determinados delitos enumerados en el artículo 3 de la Ley de Amnistía General. También excluye a los autores de otros delitos previstos en el Código Penal... que no se cometieron durante la agresión, rebelión armada o conflicto armado y que no estaban relacionados con la agresión, rebelión armada o conflicto armado en Croacia.

El acusado, Fred Marguš, está acusado de tres delitos cometidos en Čepin el 20 de noviembre de 1991 y por un delito cometido en Čepin el 1 de agosto de 1991.

Los tres primeros delitos se refieren al período más difícil y al momento en el que ocurrieron los ataques más graves en Osijek y en Croacia oriental inmediatamente después de la caída de Vukovar, y al mismo tiempo que ocurrieron los combates más severos por Laslovo. En dichos combates, el acusado se distinguió como un combatiente, mostrando un coraje excepcional y siendo recomendado para promocionar al rango de teniente por el comandante del Tercer Batallón de la Brigada 106 del ejército croata, su superior en el momento de los hechos.

En el período crítico relativo a los tres primeros delitos, el acusado actuó como miembro del ejército croata. En este período particularmente difícil y en calidad de comandante de su unidad, trató de evitar la caída de un asentamiento en manos del

enemigo, cuando existía un peligro inmediato de que esto ocurriese. El cuarto delito del que está acusado, fue cometido el 1 de agosto de 1991, cuando el acusado estaba prestando servicio como miembro en las Fuerzas de Reserva en Čepin, vistiendo el uniforme de camuflaje militar y usando armamento militar.

...

Las acciones del acusado, en vista del momento y el lugar de los hechos, estaban estrechamente relacionadas con la agresión, rebelión armada y conflicto armado en Croacia, y se llevaron a cabo durante el período contemplado en la Ley de Amnistía General.

...

En este contexto, este tribunal considera que se han cumplido con todos los requisitos legales para la aplicación de la Ley de Amnistía General...”

18. En una fecha no especificada, la fiscalía interpuso una solicitud para la protección de la legalidad (*zahijev za zaštitu zakonitosti*) ante el Tribunal Supremo, solicitando que se declarase que el artículo 3.2 de la Ley de Amnistía General había sido infringido.

19. El 19 de septiembre de 2007, el Tribunal Supremo al decidir sobre la solicitud anterior, determinó que la sentencia dictada por el Tribunal del Condado de Osijek el 24 de junio de 1997 infringía el artículo 3.2 de la Ley de Amnistía General. Los fragmentos relevantes de la sentencia del Tribunal Supremo establecían:

“... ”

El artículo 1.1 de la Ley de Amnistía General prevé una amnistía general frente a los procesos penales y al enjuiciamiento de los autores de delitos cometidos en relación con la agresión, rebelión armada o conflictos armados... en Croacia. En virtud del apartado 3 del citado artículo, la amnistía se refiere a los delitos cometidos entre el 17 de agosto de 1990 y el 23 de agosto de 1996. ...

Para la correcta interpretación de estas disposiciones – al margen de la condición general de que el delito en cuestión se haya cometido en el período comprendido entre el 17 de agosto de 1990 y el 23 de agosto de 1996 (que se ha cumplido en el presente caso) – debe existir una conexión directa y significativa entre el delito y la agresión, rebelión armada o conflicto armado. Esta interpretación es conforme al principio general de que toda persona que cometa un delito ha de responder por ello. Por lo tanto, las disposiciones anteriores, deben ser interpretadas de forma razonable, con la cautela necesaria, de forma que la amnistía no se convierta en una contradicción en sí misma y ponga en entredicho la finalidad por la que esta Ley fue promulgada. Por lo tanto, la expresión ‘en relación con la agresión, rebelión armada o conflicto armado’ utilizada en la Ley de Amnistía General, que no define de forma específica la naturaleza de dicha conexión, debe ser interpretada de forma que la conexión sea directa y significativa.

...

Parte de la descripción fáctica de los delitos de los que el demandado Fred Marguš es acusado... que sugiere cierta conexión con la agresión contra la República de Croacia o con la rebelión armada y los conflictos armados en Croacia, se refiere a la llegada de las víctimas de estos delitos – S.B., V.B., y el menor SI.B. –, a la ciudad de Čepin, junto con sus vecinos después de que hubieran huido de la aldea de Ivanovac a causa del ataque perpetrado por el llamado ‘Ejército Popular Yugoslavo’. Cabe destacar que no se discute que el acusado Fred Marguš fuera miembro del ejército croata. Sin embargo, estas circunstancias no equivalen a una relación directa con la agresión, rebelión armada o conflicto armado en Croacia, que es requisito de aplicabilidad de la Ley de Amnistía General.

La descripción fáctica de los delitos señalados en el apartado 4 de la acusación, sostiene que el acusado perpetró dichos actos como miembro de las Fuerzas de Reserva en la ciudad de Čepin, después de que su período de servicio hubiera finalizado. Esta circunstancia por sí misma, no representa un nexo de causalidad entre los delitos y la guerra ya que, de lo contrario, la amnistía abarcaría todos los delitos cometidos entre el 27 de agosto de 1990 y el 23 de agosto de 1996 por los miembros del ejército croata o por los miembros de unidades enemigas (con excepción de los delitos que figuran específicamente en el artículo 3.1 de la Ley de Amnistía General). Y esto sin duda alguna no era la intención del legislador.

Por último, la carrera en combate del acusado, descrita detalladamente en la sentencia impugnada, no puede considerarse un criterio para la aplicación de la Ley de Amnistía General...

La descripción fáctica de los delitos en el escrito de acusación... no muestra que los actos en cuestión fueran cometidos durante la agresión, rebelión armada o conflicto armado en Croacia, o que fueran cometidos en relación con estos hechos.

...”

B. Segundo procedimiento iniciado contra el demandante (núm. K-33/06)

20. El 26 de abril de 2006, la Fiscalía Estatal del Condado de Osijek, acusó al demandante de crímenes de guerra contra la población civil. El procedimiento se siguió por un tribunal compuesto por un panel de tres jueces del Tribunal del Condado de Osijek, incluyendo al juez M.K. Durante todo el procedimiento, el demandante estuvo representado por un abogado.

21. El 19 de marzo de 2007 se celebró una audiencia final con la presencia de, *inter alia*, el demandante y su representante legal. El demandante fue expulsado de la sala durante la exposición de las conclusiones finales de las partes. El representante legal del demandante continuó en la sala y presentó su alegato final. El fragmento relevante del acta de la audiencia señalaba:

“El presidente de la sala señala que el acusado Marguš interrumpió al Fiscal Estatal Adjunto del Condado de Osijek (‘Fiscal Estatal Adjunto’) durante su alegato final y fue advertido por el panel para que se calmara; la segunda vez que interrumpió al Fiscal Estatal Adjunto, recibió una advertencia oral.

Después de que el presidente del panel advirtiera oralmente al acusado Marguš, este continuó comentando el alegato final del Fiscal Estatal Adjunto. Por consiguiente, el panel acordó y su presidente ordenó que el acusado Marguš fue expulsado de la sala hasta el pronunciamiento de la sentencia.

“...”

22. El demandante fue expulsado posteriormente de la sala del tribunal y el Fiscal Estatal Adjunto, los abogados de las víctimas, los abogados defensores y uno de los acusados, expusieron sus conclusiones finales.

23. El pronunciamiento de la sentencia fue fijado para el 21 de marzo de 2007 y se concluyó la audiencia. El demandante estuvo presente en el pronunciamiento de la sentencia. Fue declarado culpable y condenado a catorce años de prisión. La parte relevante de la sentencia establece lo siguiente:

“...”

El acusado Fred Marguš...

y el acusado T.D. ...

son culpables [en tanto en cuanto]

en el período comprendido entre el 20 y 25 de noviembre de 1991 en la ciudad de Čepin y sus alrededores, en infracción del artículo 3.1 del Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra, de 12 de agosto de 1949; de los artículos 4.1 y 4.2.a), así como el artículo 13 del Protocolo adicional al Convenio de Ginebra de 12 de agosto de 1949, sobre la Protección de las víctimas en los conflictos armados sin carácter internacional (Protocolo II), de 8 de junio de 1977, mientras defendían el territorio de los ataques armados llevados a cabo por la población serbia rebelde y por el llamado ‘Ejército Popular Yugoslavo’ en su ataque conjunto contra el ordenamiento jurídico constitucional y la integridad territorial de la República de Croacia, Fred Marguš, como comandante de la segunda unidad en el tercer Cuerpo de la Brigada 130^o del ejército croata, y el acusado T.D., como miembro de la misma unidad bajo el mando de Fred Marguš, [actuando como se refiere a continuación] con la intención de matar a civiles serbios;

el acusado Fred Marguš

(a) el 20 de noviembre de 1991 sobre las 8 de la mañana en Čepin, los reconocidos como V.B., y S.B., se encontraban de pie... frente a la sede de la Brigada de Bomberos en Ivanovac y huían de su pueblo debido a los ataques perpetrados por el Ejército Popular Yugoslavo,... les dispararon con un arma automática... lo que causó a S.B. una herida de bala en la cabeza y en el cuello... que le provocó una muerte inmediata, mientras que V.B., fue herido y cayó al suelo. El acusado entonces se marchó en un coche pero volvió al poco. Cuando comprobó que V.B. aún se encontraba con vida y estaba acompañado de su hijo de nueve años de edad Sl.B., y de su esposa M.B., disparó de nuevo con el arma automática, dos veces a V.B., en la cabeza...dos veces en el brazo... causando la muerte inmediata de V.B., mientras que Sl.B., recibió un disparo en la pierna...que le causó lesiones corporales graves.

(b) en el período comprendido entre el 22 y 24 de noviembre de 1991 en Čepin, detuvo a N.V., y a Ne.V., amenazándoles con un arma de fuego, y se apropió de su vehículo Golf... los llevó hasta el sótano de una casa...donde los ató con cuerdas a unas sillas y los mantuvo encerrados sin comida ni agua y, junto con los miembros de su Unidad... los golpeó e insultó, les preguntó acerca de su presunta actividad hostil y sobre la posesión de un aparato de radio, y durante ese tiempo impidió a otros miembros de su Unidad que los ayudasen... posteriormente los llevó de Čepin a un bosque... donde fueron disparados varias veces...y, como consecuencia de lo anterior, N.V., y Ne.V. murieron.

(c) el 23 de noviembre de 1991 sobre la 1.30 de la tarde en la estación de autobuses en Čepin, arrestó a S.G., a D.G., y a su familiar Lj.G., y los llevó en coche a una casa...les ató las manos a la espalda y, junto con T.D., los interrogó sobre su presunta actividad hostil y por la tarde, cuando aún se encontraban atados, les condujo fuera de Čepin....donde les disparó causándoles la muerte;

El acusado Fred Marguš y T.D, actuando conjuntamente:

(d) el 25 de noviembre de 1991 sobre la 1 de la tarde en Čepin, al ver a S.P, al volante de su vehículo Golf... lo detuvo a petición de Fred Marguš... y lo llevó en coche a un campo...donde.. Fred Marguš ordenó a T.D., a que disparase a S.P, orden que T.D., obedeció, disparando a S.P, una vez... tras lo cual, Fred Marguš le disparó varias veces con un arma automática... causando la muerte de S.P, y Fred Marguš se apropió de su vehículo.

...”

24. La condena del demandante fue confirmada por el Tribunal Supremo el 19 de septiembre de 2007 y su pena fue incrementada a quince años de prisión. La parte pertinente de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo establece:

“En virtud del artículo 36.1.5 del Código de Enjuiciamiento Penal (CCP), un juez está exento de realizar las funciones judiciales, si en el mismo caso participó en la adopción de una decisión por un tribunal inferior o en la adopción de la decisión impugnada.

Es cierto que el juez M.K., participó en el procedimiento en el que se adoptó la resolución impugnada. Era el presidente del panel del Tribunal del Condado de Osijek que adoptó la decisión...de 24 de junio de 1997, en virtud de la cual, los procedimientos contra el acusado Fred Marguš finalizaron en virtud de los artículos 1.1 y 1.3 y el artículo 2.2 de la Ley de Amnistía General...

A pesar de que ambos procedimientos fueron iniciados contra el mismo acusado, no se trataba del mismo caso. El juez en cuestión participó en dos casos diferentes ante el Tribunal del Condado de Osijek contra el mismo acusado. En el caso en el que el presente recurso fue interpuesto, el juez M.K. no participó en la adopción de ninguna decisión de un tribunal inferior o en una decisión que fuera objeto de un recurso de apelación o de un recurso extraordinario.

...

El acusado sostuvo incorrectamente que el tribunal de primera instancia había actuado en contra de lo dispuesto en el artículo 346.4 y en el artículo 347.1 y 4 del CCP, al celebrar la audiencia final en su ausencia y la del abogado defensor, ya que había sido expulsado de la sala cuando las partes estaban exponiendo sus alegatos finales. Por lo tanto, según el acusado, se le había impedido exponer su alegato final. Además, no se le había informado sobre el desarrollo de la audiencia en su ausencia, y la decisión de expulsarlo de la sala no había sido adoptada por el panel de jueces.

En contra de lo alegado por el acusado, la copia escrita de la audiencia celebrada el 19 de marzo de 2007, muestra que el acusado Fred Marguš, interrumpió al Abogado del Estado adjunto del Condado de Osijek mientras presentaba sus conclusiones y que fue advertido en dos ocasiones por el presidente del panel. Ya que continuó con el mismo comportamiento, el panel decidió expulsarlo de la sala...

La acción llevada a cabo por el tribunal es conforme con el artículo 300.2 del CCP. El acusado Fred Marguš, comenzó a alterar el orden en la sala del tribunal durante las conclusiones finales del Fiscal Estatal y persistió en su acción, tras lo cual, fue expulsado de la sala mediante decisión del panel. El acusado volvió a estar presente en la sala cuando la sentencia fue pronunciada el 21 de marzo de 2007.

Dado que el tribunal de primera instancia cumplió plenamente con lo establecido en el artículo 300.2 del CCP, el recurso presentado por el acusado carece de fundamento. En el presente caso no ha habido una violación de los derechos de defensa y la expulsión del acusado de la sala durante las conclusiones finales de las partes, no tuvo ningún efecto en la sentencia.

...

El acusado Fred Marguš aduce además... que la sentencia impugnada violó el principio '*non bis in idem*'... ya que el procedimiento ya había sido finalizado en relación con alguno de los cargos que dieron lugar a la sentencia impugnada...

...

Es cierto que el procedimiento penal se siguió ante el Tribunal del Condado de Osijek bajo el número K-4/97 contra el acusado Fred Marguš en relación con, *inter alia*, cuatro delitos de asesinato... cometidos contra S.B., V.B., N.V., y Ne.V., así como por el delito de crear un riesgo para la vida y los bienes... Este procedimiento finalizó mediante una sentencia final dictada por el Tribunal del Condado de Osijek núm. Kv 99/97 (K-4/97) de 24 de junio de 1997, sobre la base de la Ley de Amnistía General...

A pesar de que las consecuencias de los delitos que fueron objeto de las actuaciones llevadas a cabo ante el Tribunal del Condado de Osijek bajo el número K-4/97, a saber, la muerte de S.B., V.B., N.V., y Ne.V., y las lesiones corporales graves a S.B., también forman parte de los antecedentes de hecho [de los delitos examinados] en el procedimiento en el que la sentencia impugnada fue adoptada, los delitos [juzgados en ambos procedimientos penales] no son los mismo.

La comparación entre los antecedentes de hecho [de los delitos examinados] en ambos procedimientos muestra que no son idénticos. Los antecedentes de hecho [de los delitos a los que se refiere] la sentencia impugnada contienen un elemento criminal más,

significativamente de mayor alcance que el que constituye la base del procedimiento llevado a cabo ante el Tribunal del Condado de Osijek bajo el número K-4/97. [En el presente caso] el acusado Fred Marguš está acusado de violar las normas del Convenio de Ginebra relativo a la protección debida de la personas civiles en tiempo de guerra, de 12 de agosto de 1949 y del Protocolo adicional de los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949, relativo a la Protección de las Víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional (Protocolo II), de 8 de junio de 1977, en tanto en cuanto, en el período comprendido entre el 20 y 25 de noviembre de 1991, mientras defendía el territorio de los ataques armados de la población serbia rebelde y por parte del llamado Ejército Popular Yugoslavo, en su ataque conjunto del orden jurídico constitucional y la integridad territorial de la República de Croacia, y en violación de las normas de derecho internacional, el acusado mató y torturó a civiles, tratándolos de manera inhumana, deteniéndolos ilegalmente, ordenando el asesinato de un civil y robando los bienes de la población civil. Los actos anteriormente mencionados constituyen un delito contra los valores protegidos por el derecho internacional, es decir, un crimen de guerra contra la población civil en virtud del artículo 120.1 del Código Penal.

Dado que el contexto fáctico del delito en cuestión y su calificación jurídica difieren del contexto y calificación de los delitos que fueron objeto de las actuaciones anteriores, de tal forma que el alcance de los cargos contra el acusado Fred Marguš es significativamente más amplio y diferente del caso anterior (número K-4/97), el asunto no es considerado como *res judicata* (cosa juzgada)...

25. Posteriormente el demandante interpuso un recurso constitucional que fue desestimado por el Tribunal Constitucional el 30 de septiembre de 2009. El Tribunal Constitucional respaldó la opinión del Tribunal Supremo.

II. DERECHO INTERNO Y PRÁCTICA APLICABLE

A. Legislación relevante

26. La parte relevante de la Constitución de Croacia (*Ustav Republike Hrvatske*, Boletín Oficial núm. 41/2001 y 55/2001), establece lo siguiente:

Artículo 31

“...

(2) Nadie podrá a ser juzgado o condenado penalmente por una infracción por la cual ya haya sido absuelto o condenado de conformidad con la ley.

Sólo la ley podrá, de conformidad con la Constitución o con un acuerdo internacional, prever las situaciones en las que los procedimientos puedan ser reabiertos en virtud del apartado (2) del presente artículo y los motivos de la reapertura.

...”

27. Las disposiciones relevantes del Código de Enjuiciamiento penal (*Zakon o kaznenom postupku* - Boletín Oficial núm. 110/1997, 27/1998, 58/1999, 112/1999, 58/2002, 62/2003, 178/2004 y 115/2006) disponen lo siguiente:

Artículo 300

“(1) Cuando el acusado...perturbe el orden en una audiencia o no cumpla con las órdenes del presidente del tribunal, éste deberá advertir al acusado...El panel podrá ordenar que el acusado abandone la sala...

(2) El panel podrá ordenar que el acusado abandone la sala por un tiempo limitado. Cuando el acusado vuelva a perturbar el orden, [éste podrá ser expulsado de la sala] hasta el final de la presentación de las pruebas. Antes de la finalización de la exposición de las pruebas, el presidente convocará al acusado y le informará sobre el desarrollo del juicio. Si el acusado continúa alterando el orden e atacando la dignidad del tribunal, los jueces podrán ordenar de nuevo que sea expulsado de la sala. En este caso, el juicio se celebrará en ausencia del acusado y el presidente u otro miembro del panel le informará sobre la sentencia adoptada, en presencia de un mecanógrafo.

...”

Artículo 350 (Antiguo artículo 336)

“(1) Una sentencia puede referirse únicamente al acusado y al delito del que es objeto la acusación en los términos presentados inicialmente o alterados en la audiencia.

(2) El tribunal no está vinculado por la calificación jurídica del delito realizada por la Fiscalía.”¹

Tipos de sentencias

Artículo 352

“(1) La sentencia podrá desestimar los cargos, absolver al acusado o encontrarlo culpable.

...”

Artículo 354

“Una sentencia que absuelva al acusado será adoptada cuando:

Los hechos que se le imputen al acusado no sean constitutivos de delito en virtud de la ley;

existan circunstancias que excluyan la culpabilidad de los acusados;

no se haya probado que el acusado cometió el delito del que ha sido acusado.”

Artículo 355

“1. Una sentencia que encuentre al acusado culpable de los cargos, contendrá los siguientes elementos:

(1) el delito por el que el acusado es declarado culpable, exponiendo los hechos y las circunstancias que constituyen los elementos específicos del delito en cuestión, así como aquellos de los que dependa la aplicación de una determinada disposición del Código Penal;

1. Véanse párrafos 32 a 34 *infra* para la jurisprudencia del Tribunal Supremo en relación con esta disposición.

(2) la denominación y la calificación legal del delito y las disposiciones del Código Penal que se han aplicado;

(3) la condena que ha de aplicarse o si, en virtud de lo dispuesto en el Código Penal, la condena no es aplicable o la pena de prisión debe ser sustituida por servicios comunitarios;

(4) la decisión eventual sobre la suspensión de la condena;

(5) cualquier decisión sobre medidas de seguridad y la confiscación de ganancias materiales;

...

(7) la decisión sobre las costas y cualquier reclamación en vía civil, así como si la sentencia definitiva se publicará en los medios de comunicación.

...”

Artículo 367

“1. Se producirá un vicio procesal grave del procedimiento penal cuando:

...

(3) la audiencia se haya celebrado sin la persona cuya presencia es obligatoria de conformidad con la ley...

...”

Reapertura de las actuaciones

Artículo 401

“Los procesos penales finalizados mediante resolución definitiva o sentencia definitiva podrán reabrirse a petición de una persona autorizada, únicamente en los casos y en virtud de las condiciones establecidas en el presente Código.”

Artículo 406

“1. Los procesos penales finalizados mediante una sentencia definitiva que desestime los cargos podrán reabrirse excepcionalmente cuando sea en detrimento de los acusados:

...

(5) Cuando se haya establecido que la amnistía, indulto, prescripción u otras circunstancias excluyendo la persecución penal, no son aplicables al delito al que se refiere la sentencia en donde se desestiman los cargos.

...”

Artículo 408

“1. El Tribunal competente para decidir sobre una petición de reapertura del procedimiento es aquel que conoció la causa en primera instancia...”

2. La petición de reapertura deberá contener la base legal para la reapertura y las pruebas que apoyen su petición...

...”

Solicitud para la protección de la legalidad

Artículo 418

“1. El Abogado del Estado podrá presentar una solicitud de protección de la legalidad contra las sentencias firmes y los procedimientos judiciales anteriores a este tipo de decisión, en el que una ley haya sido violada.

2. El Abogado del Estado podrá interponer una solicitud para la protección de la legalidad contra una decisión judicial adoptada en un procedimiento en donde los derechos humanos y libertades fundamentales garantizados en la Constitución, en un estatuto o en el derecho internacional hayan sido violados.

...”

Artículo 419

“1 El Tribunal Supremo de la República de Croacia resolverá las solicitudes para la protección de la legalidad.

...”

Artículo 420

“1. Al resolver una solicitud para la protección de la legalidad, el Tribunal Supremo juzgará únicamente aquellas violaciones del ordenamiento invocadas por el Abogado del Estado.

...”

Artículo 422

“... ”

2. En caso de que una solicitud para la protección de la legalidad se haya interpuesto en perjuicio del acusado y el Tribunal Supremo determine que está bien fundada, deberá limitarse a establecer que se ha producido una violación de la ley, sin alterar la sentencia firme.”

28. En virtud del Código Penal (*Kazeni zakon*, Boletín Oficial, núms. 53/1991, 39/1992 y 91/1992), las circunstancias que eximen de culpabilidad a un individuo son la falta de responsabilidad (*neubrojivost*), el error de hecho o el error de derecho.

29. La parte relevante de la Ley de Amnistía General de 24 de septiembre de 1996 (Boletín Oficial núm. 80/1996, *Zakon o općem oprostuu*) dispone lo siguiente:

Artículo 1

“Esta Ley concede la amnistía general a las acciones penales y juicios a los autores de los delitos cometidos durante la agresión, rebelión armada o conflictos armados y aquellos relacionados con la agresión, rebelión armada o conflictos armados en la República de Croacia.

No se aplicará la amnistía a la ejecución de las sentencias firmes relativas a autores de los delitos referidos en el apartado primero de este artículo.

La amnistía aplicará a las acciones y procedimientos penales por delitos cometidos entre el 17 de agosto de 1990 y el 23 de agosto de 1996.”

Artículo 2

“No se iniciarán acciones o procedimientos penales contra los autores de los delitos penales en virtud del artículo 1 de esta Ley.

Cuando una acción penal ya se haya iniciado, ésta deberá suspenderse y en un proceso penal ya iniciado por un tribunal, éste dictará una resolución de oficio con el archivo del procedimiento.

Cuando una persona a la que se le haya concedido la amnistía en virtud del párrafo 1 de este artículo se encuentre detenida, ésta deberá ser puesta en libertad.”

Artículo 3

“No se concederá la amnistía en virtud del artículo 1 de esta Ley a los autores de las violaciones más graves del derecho internacional humanitario que tengan el carácter de crímenes de guerra, a saber, el delito de genocidio en virtud del artículo 119 del Código Penal Básico de la República de Croacia (Boletín Oficial núm. 31/1993, texto refundido, núms. 35/1993, 108/1995, 16/1996 y 28/1996); crímenes de guerra contra la población civil en virtud del artículo 120; crímenes de guerra contra los heridos o enfermos en virtud del artículo 121; crímenes de guerra contra prisioneros de guerra en virtud del artículo 122; la organización de grupos con el propósito de cometer genocidio y crímenes de guerra en virtud del artículo 123; la comisión ilegal de asesinatos y heridas al enemigo en virtud del artículo 124; privación ilegal de las posesiones de las personas muertas o heridas en el campo de batalla en virtud del artículo 125; el uso ilícito de medios de combate en virtud del artículo 126; delitos contra los negociadores en virtud del artículo 127; el trato cruel a los heridos, enfermos y prisioneros de guerra en virtud del artículo 128; retraso injustificado en la repatriación de prisioneros de guerra en virtud del artículo 129; destrucción del patrimonio cultural e histórico en virtud del artículo 130; incitar la guerra de agresión en virtud del artículo 131; el abuso de símbolos internacionales en virtud del artículo 132; la discriminación racial o de cualquier otro tipo en virtud del artículo 133; el establecimiento de la esclavitud y la transferencia de esclavos en virtud del artículo 134; el terrorismo internacional en virtud del artículo 135; poner en riesgo a las personas bajo protección internacional en virtud del artículo 136; la toma de rehenes en virtud del artículo 137; y el delito de terrorismo en virtud de las disposiciones del derecho internacional.

No será concedida la amnistía a los autores de otros delitos previstos en el Código Penal Básico de la República de Croacia (Boletín Oficial núm. 31/1993, texto refundido núms. 35/1993, 108/1995, 16/1996 y 28/1996) y del Código Penal de la República de Croacia (Boletín Oficial núm. 32/1993, texto refundido núms. 38/1993, 28/1996 y 30/1996) que no fueran cometidos durante la agresión, rebelión armada o conflictos armados y que no estuvieren relacionados con la agresión, rebelión armada o conflictos armados en la República de Croacia.

...”

Artículo 4

“La Abogacía del Estado no podrá interponer un recurso contra una resolución judicial que, en virtud del artículo 2 de esta Ley, conceda una amnistía a favor del autor de un delito previsto en la presente Ley, sobre la base de la calificación jurídica del delito realizada por la Abogacía del Estado.”

B. Práctica aplicable

1. *Práctica del Tribunal Constitucional*

30. En su sentencia núm. U-III/543/1999 de 26 de noviembre de 2008, el Tribunal Constitucional sostuvo, en lo que aquí es relevante, lo siguiente:

“6. La cuestión planteada ante el Tribunal Constitucional es si hubo un segundo juicio en relación con un hecho delictivo al que se le aplicó la Ley de Amnistía General, y por lo tanto, si el procedimiento en cuestión trata un ‘mismo delito’ por el que, de conformidad con el artículo 31.2 de la Constitución no es posible iniciar un procedimiento nuevo, separado y sin relación con el conjunto de actuaciones. Tales actuaciones infringirían el principio de seguridad jurídica y llevarían a que múltiples sanciones fueran impuestas por una misma conducta que pueda ser objeto de una sola sanción penal. Para responder a esta cuestión, el Tribunal Constitucional debe examinar dos cuestiones: (a) la similitud entre la descripción de los hechos constitutivos de los delitos por los que el recurrente fue acusado en ambos procedimientos, con el fin de verificar si la decisión sobre la aplicación de la amnistía y la condena definitiva en los procedimientos posteriores se refieren a la misma materia, es decir, a la misma ‘calificación penal’, con independencia de que se refieran a los mismos acontecimientos históricos; y después de eso... (b) si el caso en cuestión se refiere a una situación en la que no era posible añadir nuevos cargos en relación con hechos ya juzgados en las primeras decisiones de los tribunales que aplicaron la amnistía, pero para la que, en virtud del artículo 31.3 de la Constitución, era posible solicitar la reapertura del procedimiento conforme a lo dispuesto en la ley aplicable. El artículo 406.1.5 del Código de Enjuiciamiento Penal permite la reapertura de los procedimientos que hayan finalizado mediante sentencia firme desestimatoria de los cargos, cuando ‘se determine que la amnistía, el indulto, prescripción u otras circunstancias que excluyen las acciones penales, no es aplicable al delito al que se refiere la sentencia en la que se desestiman los cargos’.

6.1. El Tribunal Constitucional puede examinar la similitud entre las descripciones de los hechos constitutivos de delito únicamente mediante su remisión a los estándares normativos. Al hacerlo, está sujeto, al igual que los tribunales de primera instancia, a los elementos constitutivos de delito, con independencia de su calificación jurídica. Las descripciones de los hechos que constituyen la base de los cargos en la sentencia del Tribunal Militar de Bjelovar (núm. K-85/95-24) y del Tribunal Supremo (núm. I-Kž-257/96), y las sentencias impugnadas del Tribunal del Condado de Sisak (núm. K-108/97) y del Tribunal Supremo núm. I-Kž-211/1998-3), sin duda, sugieren que

se refieren a los mismos hechos que simplemente recibieron una distinta calificación legal. Todos los hechos relevantes han sido determinados por el Tribunal Militar de Bjelovar (que finalmente archivó el procedimiento) y no hay una nueva declaración de hechos probados en el procedimiento posterior ante el Tribunal del Condado de Sisak. La única diferencia en la descripción de los cargos se refiere al momento de la comisión de los delitos, lo que no sugiere que los hechos fueran diferentes, sino más bien que los tribunales no pudieron determinar la hora exacta de la comisión de los delitos. En cuanto a la naturaleza idéntica de los hechos, también es relevante señalar que el Tribunal Supremo hizo hincapié en la sentencia recurrida en que los hechos eran los mismos, por lo que no hay duda alguna a este respecto.

6.2. En la sentencia recurrida, el Tribunal Supremo sostuvo que la conducta en cuestión no solamente constituía un delito de rebelión armada en virtud del artículo 235.1 del Código Penal de la República de Croacia, respecto al cual se dictó la sentencia desestimando los cargos, sino que también constituía un delito de crímenes de guerra contra la población civil en virtud del artículo 120.1 y 120.2 del Código Penal Básico de la República de Croacia, un delito por el que el demandante fue condenado posteriormente. De ahí que el Tribunal Supremo determinase que la misma conducta constituía dos delitos diferentes, y que se daba la situación de que un mismo acto, constituía varios delitos.

6.3. El Tribunal Constitucional considera que en la sentencia recurrida, el Tribunal Supremo erró al considerar que el mismo autor, después de que se hubiera dictado una sentencia firme con respecto a un único acto constituyente de delito, podría ser juzgado de nuevo en una nueva serie de actuaciones para el mismo acto, por cuanto constituía otro delito. En virtud del artículo 336.2 del Código de Enjuiciamiento Penal, un tribunal no está sujeto a la calificación jurídica de un delito realizada por el fiscal. Si el Tribunal Militar de Bjelovar, hubiera considerado que los hechos inherentes a los cargos constituían el delito de crímenes de guerra contra la población civil de conformidad con el artículo 120.1 del Código Penal básico de la República de Croacia, debía haberse declarado incompetente para conocer el caso (porque no tenía competencia para juzgar crímenes de guerra), y debía haber enviado el caso a la jurisdicción competente, que podría haber condenado al demandante por el delito de crímenes de guerra contra la población civil, respecto del cual, no podía aplicarse la amnistía. Dado que el Tribunal Militar de Bjelovar no actuó de tal forma, se deduce que debido al carácter definitivo de la sentencia, la decisión de desestimar los cargos se convirtió en *res judicata*. La condena posterior constituye por lo tanto, una violación del principio *non bis in idem*, con independencia del hecho de que la parte dispositiva de la primera sentencia no se refiriese al ‘fondo del asunto’, a veces entendida simplemente como una resolución de la cuestión de si el acusado cometió o no el delito. La distinción formal entre una absolución y una sentencia desestimatoria de los cargos no puede ser únicamente el criterio para la resolución de la cuestión acerca de si una nueva serie de actuaciones e independientes de la anterior, podrían iniciarse en relación con el mismo ‘delito’. A pesar de encontrarse en la sentencia desestimatoria de los cargos, la decisión sobre la aplicación de la amnistía, en un sentido jurídico, tiene las mismas consecuencias jurídicas que la absolución, y en ambas sentencias, la cuestión de hecho sigue sin comprobarse.

6.4. Por consiguiente, el Tribunal Constitucional no puede aceptar el razonamiento del Tribunal Supremo en la sentencia núm. I Kž-211/1998-3 de 1 de abril de 1999, según el cual, la sentencia o la resolución sobre la suspensión de las actuaciones por el delito de rebelión armada en relación con el mismo caso, no excluye la posibilidad de un enjuiciamiento y condena posteriores por el delito de crímenes de guerra contra la población civil con el argumento de que éste último delito no solamente pone en peligro los valores de la República de Croacia, sino también pone en peligro la humanidad en general y el derecho internacional. En cualquier caso, el Tribunal Supremo se apartó posteriormente de esta posición en el asunto núm. I Kž-8/00-3 de 18 de septiembre de 2002, determinando que la sentencia que desestimaba los cargos ‘sin duda alguna se refería a los mismos hechos, en términos de tiempo, lugar y forma de la comisión; los hechos simplemente dieron lugar a una calificación legal en la sentencia recurrida diferente a la dada por la sentencia dictada por el Tribunal Militar de Zagreb’. Asimismo, declaró lo siguiente: ‘Cuando, como en el presente caso, un procedimiento penal ha sido suspendido en relación con un delito previsto en el artículo 244.2 del Código Penal de la República de Croacia y cuando las acciones... son idénticas a aquellas por las que [el acusado] fue declarado culpable en el juicio impugnado... de conformidad con el principio ‘*non bis in idem*’ previsto en el artículo 32.2 de la Constitución, no puede iniciarse un nuevo procedimiento penal, debido a que el asunto ya ha sido juzgado’.

...”

31. Sentencia del Tribunal Constitucional núm. U-III-791/1997 de 14 de marzo de 2001, relativa a un supuesto en el que procedimiento penal contra el acusado había finalizado por aplicación de la Ley de Amnistía General. La parte relevante de la sentencia dispone lo siguiente:

“16. La disposición de la Constitución en donde se excluye la posibilidad de que un acusado sea juzgado de nuevo por un delito por el que ya haya sido ‘absuelto o condenado de conformidad con la ley’, se refiere exclusivamente al supuesto en el que una sentencia ha sido dictada en el marco de un procedimiento penal en el que se ha absuelto al acusado o se le ha declarado culpable de los cargos presentados en su contra en el escrito de acusación.

...

19. ... una decisión que no absuelve al acusado, sino que ordena la finalización del procedimiento penal, no puede servir de fundamento para la aplicación de las disposiciones constitucionales relativas a la prohibición de ser juzgado o sancionado de nuevo...”

2. *Práctica del Tribunal Supremo*

32. La parte relevante de la decisión núm. I Kž-533/00-3 de 11 de Diciembre de 2001, dispone lo siguiente:

“En virtud del artículo 336.2 del Código de Enjuiciamiento Penal, un tribunal no se encuentra vinculado a la calificación legal del delito llevada a cabo por el fiscal y

por lo tanto, tiene la facultad de decidir sobre un delito diferente, si este delito es más favorable al acusado. ...”

33. La parte relevante de la decisión núm. I Kž-257/02-5 de 12 de octubre de 2005, dispone lo siguiente:

“Dado que en virtud del artículo 336.2 del Código de Enjuiciamiento Penal, un tribunal no se encuentra vinculado por la calificación legal de un delito llevada a cabo por el fiscal y dado que la posible condena por el delito de incitación al abuso de autoridad en asuntos financieros de conformidad con el artículo 292.2 es más menos gravoso que la posible condena por el delito en virtud del artículo 337.4 del Código Penal, el tribunal de primera instancia estaba facultado para calificar los actos en cuestión como un delito penal tipificado en el artículo 292.2 del Código Penal. ...”

34. La parte relevante de la decisión núm. I Kž-657/10-3 de 27 de octubre de 2010, dispone lo siguiente:

“A pesar de que el tribunal de primera instancia declaró correctamente que un delito no se encuentra vinculado por la calificación jurídica llevada a cabo por el fiscal, no obstante, los términos del escrito de acusación se excedieron toda vez que el tribunal de primera instancia puso al acusado en una posición menos favorable al condenarle por dos delitos en lugar de uno ...”

III. MATERIALES DE DERECHO INTERNACIONAL APLICABLES

A. Convención de Viena de 1969 sobre el Derecho de los Tratados

35. La parte relevante de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 23 de mayo de 1969 (“la Convención de Viena”) establece

Sección tercera. Interpretación de los Tratados

Artículo 31

Regla General de Interpretación

“1. Un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objeto y fin.

2. Para los efectos de la interpretación de un tratado, el contexto comprenderá, además del texto, incluidos su preámbulo y anexos:

(a) todo acuerdo que se refiera al tratado y haya sido concertado entre todas las partes con motivo de la celebración del tratado;

(b) todo instrumento formulado por una o más partes con motivo de la celebración del tratado y aceptado por las demás como instrumento referente al tratado.

3. Juntamente con el contexto, habrá de tenerse en cuenta:

(a) todo acuerdo ulterior entre las partes acerca de la interpretación del tratado o de la aplicación de sus disposiciones;

(b) toda practica ulteriormente seguida en la aplicación del tratado por la cual conste el acuerdo de las partes acerca de la interpretación del tratado;

(c) toda norma pertinente de derecho internacional aplicable en las relaciones entre las partes.

4. Se dará a un término un sentido especial si consta que tal fue la intención de las partes.”

Artículo 32

Medios de interpretación complementarios

“Se podrán acudir a medios de interpretación complementarios, en particular a los trabajos preparatorios del tratado y a las circunstancias de su celebración, para confirmar el sentido resultante de la aplicación del artículo 31, o para determinar el sentido cuando la interpretación dada de conformidad con el artículo 31:

(a) deje ambiguo u oscuro el sentido; o

(b) conduzca a un resultado manifiestamente absurdo o irrazonable.”

Artículo 33

Interpretación de tratados autenticados en dos o más idiomas

“1. Cuando un tratado haya sido autenticado en dos o más idiomas, el texto hará igualmente fe en cada idioma, a menos que el tratado disponga o las partes convengan que en caso de discrepancia prevalecerá uno de los textos.

2. Una versión del tratado en idioma distinto de aquel en que haya sido autenticado el texto será considerada como texto auténtico únicamente si el tratado así lo dispone o las partes así lo convienen.

3. Se presumirá que los términos del tratado tienen en cada texto auténtico igual sentido.

4. Salvo en el caso en que prevalezca un texto determinado conforme a lo previsto en el párrafo 1, cuando la comparación de los textos auténticos revele una diferencia de sentido que no pueda resolverse con la aplicación de los artículos 31 y 32, se adoptará el sentido que mejor concilie esos textos, habida cuenta del objeto y del fin del tratado.”

B. Convenios de Ginebra de 1949 para la Protección de las Víctimas de los conflictos armados y sus Protocolos adicionales

36. La parte relevante del artículo 3 común de los Convenios de Ginebra de 1949, establece:

Artículo 3

“En caso de conflicto armado que no sea de índole internacional y que surja en el territorio de una de las Altas Partes Contratantes cada una de las Partes en conflicto tendrá la obligación de aplicar, como mínimo, las siguientes disposiciones:

(1) Las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas puestas

fuera de combate por enfermedad, herida, detención o por cualquier otra causa, serán, en todas las circunstancias, tratadas con humanidad, sin distinción alguna de índole desfavorable basada en la raza, el color, la religión o la creencia, el sexo, el nacimiento o la fortuna o cualquier otro criterio análogo.

A este respecto, se prohíben, en cualquier tiempo y lugar, por lo que atañe a las personas arriba mencionadas:

(a) los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles, la tortura y los suplicios;

(b) la toma de rehenes;

(c) los atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes;

(d) las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal legítimamente constituido, con garantías judiciales reconocidas como indispensables por los pueblos civilizados.

...”

37. La parte relevante del I Convenio para aliviar la suerte que corren los heridos y los enfermos de las fuerzas armadas en campaña (Ginebra, 12 de agosto de 1949 – en adelante “el primer Convenio de Ginebra”) establece:

Capítulo IX: Represión de los abusos y de las infracciones

Artículo 49

“Las Altas Partes Contratantes se comprometen a tomar todas las oportunas medidas legislativas para determinar las adecuadas sanciones penales que se han de aplicar a las personas que hayan cometido, o dado orden de cometer, una cualquiera de las infracciones graves contra el presente Convenio definidas en el artículo siguiente.

Cada una de las Partes Contratantes tendrá la obligación de buscar a las personas acusadas de haber cometido, u ordenado cometer, una cualquiera de las infracciones graves, y deberá hacerlas comparecer ante los propios tribunales, sea cual fuere su nacionalidad. Podrá también, si lo prefiere, y según las disposiciones previstas en la propia legislación, entregarlas para que sean juzgadas por otra Parte Contratante interesada, si esta ha formulado contra ellas cargos suficientes.

...”

Artículo 50

“Las infracciones graves a las que se refiere el artículo anterior son las que implican uno cualquiera de los actos siguientes, si se cometen contra personas o bienes protegidos por el Convenio: el homicidio intencional, la tortura o los tratos inhumanos, incluidos los experimentos biológicos, el hecho de causar deliberadamente grandes sufrimientos o de atentar gravemente contra la integridad física o la salud, la destrucción y la apropiación de bienes, no justificada por necesidades militares y efectuadas a gran escala, ilícita y arbitrariamente.”

38. Los artículos 50 y 51 del II Convenio para aliviar la suerte que corren los heridos, los enfermos y los náufragos de las fuerzas armadas en el mar (Ginebra, 12 de agosto de 1949 – en adelante “El segundo Convenio de Ginebra”) contiene el mismo texto que los artículos 49 y 50 del Primer Convenio de Ginebra.

39. Los artículos 129 y 130 del III Convenio relativo al trato debido a los prisioneros de guerra (Ginebra, 12 de agosto de 1949 – en adelante “El Tercer Convenio de Ginebra”) contiene el mismo texto que los artículos 49 y 50 del Primer Convenio de Ginebra.

40. Los artículos 146 y 147 del IV Convenio relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra (Ginebra, 12 de agosto de 1949 – en adelante “El Cuarto Convenio de Ginebra”), contiene el mismo texto que los artículos 49 y 50 del Primer Convenio de Ginebra.

41. La parte relevante del II Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional (Ginebra, 8 de junio de 1977), establece:

Artículo 4

“1. Todas las personas que no participen directamente en las hostilidades, o que hayan dejado de participar en ellas, estén o no privadas de libertad, tienen derecho a que se respeten su persona, su honor, sus convicciones y sus prácticas religiosas. Serán tratadas con humanidad en toda circunstancia, sin ninguna distinción de carácter desfavorable. Queda prohibido ordenar que no haya supervivientes.

2. Sin perjuicio del carácter general de las disposiciones que preceden, están y quedarán prohibidos en todo tiempo y lugar con respecto a las personas a que se refiere el párrafo 1:

(a) los atentados contra la vida, la salud y la integridad física o mental de las personas, en particular el homicidio y los tratos crueles tales como la tortura y las mutilaciones o toda forma de pena corporal; ...”

Artículo 6

“... ”

5. A la cesación de las hostilidades, las autoridades en el poder procurarán conceder la amnistía más amplia posible a las personas que hayan tomado parte en el conflicto armado o que se encuentren privadas de libertad, internadas o detenidas por motivos relacionados con el conflicto armado.”

Artículo 13

“1. La población civil y las personas civiles gozarán de protección general contra los peligros procedentes de operaciones militares. Para hacer efectiva esta protección, se observarán en todas las circunstancias las normas siguientes.

2. No serán objeto de ataque la población civil como tal, ni las personas civiles. Quedan prohibidos los actos o amenazas de violencia cuya finalidad principal sea aterrorizar a la población civil.

3. Las personas civiles gozarán de la protección que confiere este Título, salvo si participan directamente en las hostilidades y mientras dure tal participación.”

C. Convenio para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio²

42. Las partes relevantes de este Convenio establece lo siguiente:

Artículo 1

“Las Partes contratantes confirman que el genocidio, ya sea cometido en tiempo de paz o en tiempo de guerra, es un delito de derecho internacional que ellas se comprometen a prevenir y a sancionar.”

Artículo 4

“Las personas que hayan cometido genocidio o cualquiera de los otros actos enumerados en el artículo III, serán castigadas, ya se trate de gobernantes, funcionarios o particulares.”

Artículo 5

“Las Partes contratantes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus Constituciones respectivas, las medidas legislativas necesarias para asegurar la aplicación de las disposiciones de la presente Convención, y especialmente a establecer sanciones penales eficaces para castigar a las personas culpables de genocidio o de cualquier otro de los actos enumerados en el artículo 3.”

D. Convención sobre imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y los Crímenes contra la Humanidad³

43. La parte relevante de esta Convención, dispone lo siguiente:

Artículo I

“Los siguientes delitos son imprescriptibles, cualquiera sea la fecha en que se hayan cometido:

(a) Los crímenes de guerra según la definición dada en el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Núremberg, de 8 de agosto de 1945, y confirmada por las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 3 (I) de 13 de febrero de 1946 y 95 (I) de 11 de diciembre de 1946, sobre todo las ‘infracciones graves’ enumeradas en los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 para la protección debida de las víctimas de la guerra.

(b) Los crímenes de lesa humanidad cometidos tanto en tiempo de guerra como en tiempo de paz, según la definición dada en el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Núremberg, de 8 de agosto de 1945, y confirmada por las resoluciones de la

2. Adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas en su resolución 260 (III) A, de 9 de diciembre de 1948.

3. Adoptado el 26 de noviembre de 1968; entrada en vigor el 11 de noviembre de 1970. Ratificado por Croacia el 12 de octubre de 1992.

Asamblea General de las Naciones Unidas 3 (I) de 13 de febrero de 1946 y 95 (I) de 11 de diciembre de 1946, así como la expulsión por ataque armado u ocupación y los actos inhumanos debidos a la política de apartheid y el delito de genocidio definido en la Convención de 1948 para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, aun si esos actos no constituyen una violación del derecho interno del país donde fueron cometidos.”

Artículo II

“Si se cometiere alguno de los crímenes mencionados en el artículo 1, las disposiciones de la presente Convención se aplicarán a los representantes de la autoridad del Estado y a los particulares que participen como autores o cómplices o que inciten directamente a la perpetración de alguno de esos crímenes, o que conspiran para cometerlos, cualquiera que sea su grado de desarrollo, así como a los representantes de la autoridad del Estado que toleren su perpetración”.

Artículo III

“Los Estados parte en la presente Convención, se comprometen a adoptar todas las medidas internas que sean necesarias, legislativas o de cualquier otro orden, con el fin de hacer posible la extradición de conformidad con el derecho internacional, de las personas a que se refiere el artículo 2 de la presente Convención.”

Artículo IV

“Los Estados parte en la presente Convención se comprometen a adoptar, con arreglo a sus respectivos procedimientos constitucionales, las medidas legislativas o de otra índole que fueran necesarias para que la prescripción de la acción penal o de la pena, establecida por ley o de otro modo, no se aplique a los crímenes mencionados en los artículos 1 y 2 de la presente Convención, y, en caso de que exista, sea abolida.”

E. Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional

44. El artículo 20 del Estatuto establece:

Non bis in idem

“1. Salvo que en el presente Estatuto se disponga otra cosa, nadie será procesado por la Corte en razón de conductas constitutivas de crímenes por los cuales ya hubiere sido condenado o absuelto por la Corte.

2. Nadie será procesado por otro tribunal en razón de uno de los crímenes mencionados en el artículo 5 por el cual la Corte ya le hubiere condenado o absuelto.

3. La Corte no procesará a nadie que haya sido procesado por otro tribunal en razón de hechos también prohibidos en virtud de los artículos 6, 7 u 8 a menos que el proceso en el otro tribunal:

(a) Obedeciera al propósito de sustraer al acusado de su responsabilidad penal por crímenes de la competencia de la Corte; o

(b) No hubiere sido instruido en forma independiente o imparcial de conformidad con las debidas garantías procesales reconocidas por el derecho internacional o lo

hubiere sido de alguna manera que, en las circunstancias del caso, fuere incompatible con la intención de someter a la persona a la acción de la justicia.”

F. Normas consuetudinarias del derecho internacional humanitario

45. A petición de los Estados reunidos en la 26ª Conferencia Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) presentó en 2005 un estudio sobre el derecho internacional humanitario consuetudinario⁴. El estudio contiene una lista de las normas consuetudinarias de derecho internacional humanitario. La norma 159, que se refiere a los conflictos armados no internacionales, establece:

“Cuando hayan cesado las hostilidades, las autoridades en el poder se esforzaran por conceder la amnistía más amplia posible a quienes hayan participado en un conflicto armado no internacional o a las personas privadas de libertad por razones relacionadas con el conflicto armado, salvo a las personas sospechosas o acusadas de haber cometido crímenes de guerra, o que estén condenadas por ello.”

G. Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

Resolución sobre la situación en Croacia, 1120 (1997), 14 julio 1997

46. La parte relevante de la Resolución establece:

“El Consejo de Seguridad:

...

7. Insta al Gobierno de la República de Croacia a que elimine toda ambigüedad en la aplicación de la Ley de amnistía y que la aplique con justicia y objetividad, de conformidad con las normas internacionales, en particular llevando a término todas las investigaciones de los delitos abarcados por la amnistía e iniciando de inmediato, conjuntamente con las Naciones Unidas y la comunidad serbia local, un estudio de todos los cargos de violaciones graves del derecho internacional humanitario que no abarca la amnistía, pendientes contra diversas personas, a fin de finalizar los procedimientos contra todas las personas contra las cuales no haya pruebas suficientes;

...”

H. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

47. El artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) de 1966 establece:

“Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En particular, nadie será sometido sin su libre consentimiento a experimentos médicos o científicos.”

4. J-M. Henckaerts y L. Doswald-Beck (eds.), *Customary International Humanitarian Law*, 2 Volumes, Cambridge University Press & ICRC, 2005.

I. Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas

1. *Observación General núm. 20, artículo 7 (44º Sesión, 1992)*

48. En 1992, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas observó en su Observación General núm. 20, sobre el artículo 7 del Pacto Internacional, que algunos Estados habían concedido amnistías respecto de actos de tortura. Llegó a afirmar que “Las amnistías son generalmente incompatibles con la obligación de los Estados de investigar tales actos, de garantizar que no se cometan tales actos dentro de su jurisdicción y de velar por que no se realicen tales actos en el futuro. Los Estados no pueden privar a los particulares del derecho a una reparación efectiva, incluida la indemnización y la rehabilitación más completa posible.”

2. *Observaciones finales, Líbano, de 1 de abril de 1997*

49. El apartado 12 dispone lo siguiente:

“12. El Comité observa con preocupación la amnistía otorgada al personal civil y militar por las violaciones de los derechos humanos de los civiles que puedan haberse cometido en el curso de la guerra civil. Esa amnistía generalizada puede impedir que se investigue y se castigue debidamente a los autores de violaciones de los derechos humanos en el pasado, socavar los esfuerzos por imponer la observancia de los derechos humanos y obstaculizar los esfuerzos por consolidar la democracia.”

3. *Observaciones finales, Croacia, de 30 de abril de 2001*

50. El apartado 11 dispone lo siguiente:

“Al Comité le preocupan las repercusiones de la Ley sobre la amnistía. Si bien en esa ley se estipula específicamente que la amnistía no es aplicable a los crímenes de guerra, el término ‘crímenes de guerra’ no está definido y existe el peligro de que la ley se aplique de tal forma que se conceda impunidad a personas acusadas de violaciones graves de los derechos humanos. El Comité lamenta que no se le haya proporcionado información sobre los casos en que los tribunales hayan interpretado y aplicado la Ley sobre la amnistía.

El Estado Parte deberá garantizar que en la práctica la Ley sobre la Amnistía no se aplique o utilice para conceder impunidad a las personas acusadas de violaciones graves de los derechos humanos.”

4. *Observación General núm. 31 [80], sobre la índole de la obligación jurídica general impuesta a los Estados Partes en el Pacto, de 29 de marzo de 2004.*

“18. Cuando las investigaciones a que se hace referencia en el párrafo 15 revelan la violación de ciertos derechos reconocidos en el Pacto, los Estados Parte deben asegurarse de que los responsables comparezcan ante la justicia. Como sucede cuando

no se abre una investigación, el hecho de que no se haga comparecer ante la justicia a los autores de violaciones puede ser de por sí una vulneración del Pacto. Esas obligaciones existen, concretamente, en relación con las infracciones reconocidas como delitos con arreglo al derecho interno o al derecho internacional, entre ellos la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes (art. 7), las privaciones de vida sumarias y arbitrarias (art. 6) y las desapariciones forzosas (artículos 7 y 9 y, frecuentemente, 6). En más, el problema de la impunidad respecto de estas violaciones, cuestión de permanente preocupación del Comité, puede ser un elemento importante que contribuye a la repetición de las infracciones. Cuando se cometen como parte de una agresión generalizada o sistemática contra la población civil, estas infracciones del Pacto constituyen crímenes de lesa humanidad (véase el artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional).

Por lo tanto, en los casos en que algún funcionario público o agente estatal haya cometido violaciones de los derechos reconocidos en el Pacto a los que se hace referencia en el presente párrafo, los Estados Parte de que se trate no podrán eximir a los autores de su responsabilidad jurídica personal, como ha ocurrido con determinadas amnistías (véase la Observación general núm. 20 (44)) y anteriores inmunidades. Además, ningún cargo oficial justifica que se exima de responsabilidad jurídica a las personas a las que se atribuya la autoría de estas violaciones.

...”

J. Convenio contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes⁵

51. Las partes relevantes de este Convenio, disponen:

Artículo 4

“1. Todo Estado Parte velará para que todos los actos de tortura constituyan delitos conforme a su legislación penal. Lo mismo se aplicará a toda tentativa de cometer tortura y a todo acto de cualquier persona que constituya complicidad o participación en la tortura.

2. Todo Estado Parte castigara esos delitos con penas adecuadas en las que se tenga en cuenta su gravedad.”

Artículo 7

“1. El Estado Parte en el territorio de cuya jurisdicción sea hallada la persona de la cual se supone que ha cometido cualquiera de los delitos a que se hace referencia en el

5. Aprobado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Resolución de la Asamblea General 39/46 de 10 de diciembre de 1984; entrada en vigor el 26 de junio de 1987.

artículo 4, en los supuestos previstos en el artículo 5, si no procede a su extradición, someterá el caso a sus autoridades competentes a efectos de enjuiciamiento.

...

Artículo 12

“Todo Estado parte velará por que, siempre que haya motivos razonables para creer que dentro de su jurisdicción se ha cometido un acto de tortura, las autoridades competentes procedan a una investigación pronta e imparcial.”

Artículo 13

“Todo Estado parte velará por que toda persona que alegue haber sido sometida a tortura en cualquier territorio bajo su jurisdicción tenga derecho a presentar una queja y a que su caso sea pronta e imparcialmente examinado por sus autoridades competentes. Se tomaran medidas para asegurar que quien presente la queja y los testigos estén protegidos contra malos tratos o intimidación como consecuencia de la queja o del testimonio prestado.”

Artículo 14

“1. Todo Estado Parte velará por que su legislación garantice a la víctima de un acto de tortura la reparación y el derecho a una indemnización justa y adecuada, incluidos los medios para su rehabilitación lo más completa posible. En caso de muerte de la víctima como resultado de un acto de tortura, las personas a su cargo tendrán derecho a indemnización.

2. Nada de lo dispuesto en el presente artículo afectará a cualquier derecho de la víctima o de otra persona a indemnización que pueda existir con arreglo a las leyes nacionales.”

K. Comisión de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos

52. Las partes relevantes de las resoluciones sobre impunidad establecen:

1. Resolución 2002/79, de 25 de abril de 2002 y Resolución 2003/72, de 25 de abril de 2003

“La Comisión de Derechos Humanos:

...

2. Subraya también la importancia de adoptar todas las medidas posibles y necesarias para que respondan ante la justicia los autores, incluidos los cómplices, de violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, reconoce que no debería concederse la amnistía a quienes cometan violaciones del derecho humanitario internacional y de la normativa de derechos humanos que constituyan delitos graves e insta a los Estados a que actúen respetando las obligaciones que les corresponden conforme al derecho internacional;

...”

2. Resolución 2004/72, de 21 de abril de 2004

“La Comisión de Derechos Humanos:

...

3. Estima también que no se debe conceder la amnistía a quienes hayan cometido violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario que constituyan delito, encarece a los Estados que tomen medidas conformes con las obligaciones que han contraído en virtud del derecho internacional y acoge con satisfacción la supresión o la anulación de la amnistía y de otras clases de inmunidad o la renuncia a ellas;

...”

3. Resolución 2005/82, de 21 de abril de 2005

“La Comisión de Derechos Humanos:

...

3. Estima también que no se debe conceder la amnistía a quienes hayan cometido violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario que constituyan delito, encarece a los Estados que tomen medidas conformes con las obligaciones que han contraído en virtud del derecho internacional y acoge con satisfacción la supresión o la anulación de la amnistía y de otras clases de inmunidad o la renuncia a ellas, y reconoce también la conclusión del Secretario General de que los acuerdos de paz aprobados por las Naciones Unidas nunca puedan prometer amnistías por crímenes de genocidio, de guerra o de lesa humanidad o por infracciones graves de los derechos humanos;

...”

L. Parlamento Europeo

Resolución A3-0056/93, de 12 de marzo de 1993

53. La parte relevante de la Resolución sobre los derechos humanos en el mundo y la política de derechos humanos de la Comunidad durante los años 1991-1992, establece:

“El Parlamento Europeo,

...

7. Considera que el problema de la impunidad... puede adoptar la forma de amnistía, inmunidad o jurisdicción extraordinaria y constituye una coacción para la democracia, perdonando de hecho a los responsables de las infracciones contra los derechos humanos y angustiando a las víctimas;

8. Afirma que los responsables de crímenes de guerra en la antigua Yugoslavia no deberían quedar impunes...”

M. Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Tortura

Quinto Informe, UN Doc. E/CN.4/1998/38, de 24 de diciembre de 1997

54. En 1998, en las conclusiones y recomendaciones de su quinto informe sobre la cuestión de los derechos humanos de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o encarcelamiento y, en particular, a la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, el Relator Especial de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas señaló, en relación con el anteproyecto del Estatuto de la Corte Penal Internacional:

“228. A este respecto, el Relator Especial está enterado de que se ha sugerido que podrían dictarse amnistías a nivel nacional que constituirían un obstáculo a la jurisdicción de las cortes propuestas. Considera que una iniciativa de tal naturaleza es una amenaza no sólo para el proyecto que se contempla sino para la legalidad internacional en general. Debilitaría gravemente el objetivo de la corte propuesta, al permitir a los Estados que legislaran sobre sus nacionales fuera de la jurisdicción del tribunal. Menoscararía la legalidad internacional porque es evidente que los Estados no pueden invocar su propia ley para eludir sus obligaciones en virtud del derecho internacional. Como el derecho internacional exige que los Estados castiguen los delitos contemplados en general en el proyecto de estatuto de la corte, y la tortura en particular, y que juzguen a sus autores, las amnistías en cuestión son *ipso facto* violaciones de las obligaciones de los Estados en cuestión de llevar a los transgresores ante la justicia. ...”

N. Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY)

55. La parte relevante del asunto *Furundžija* (sentencia de 10 de diciembre de 1998) establece:

“155. El hecho de que la tortura esté prohibida por una norma imperativa de derecho internacional tiene otros efectos a nivel interestatal e individual. A nivel interestatal sirve para deslegitimar internacionalmente cualquier acto legislativo, administrativo o judicial que autorice la tortura. Por un lado, no tendría sentido argumentar, que en base al carácter de *ius cogens* de la prohibición de la tortura, los tratados o normas consuetudinarias que regulan la tortura son nulos y no tienen efectos *ab initio*, y luego fueran omitidas por un Estado, adoptando medidas nacionales que autoricen o toleren la tortura o absuelvan a sus autores a través de una ley de amnistía. Si tal situación se produjera, las medidas nacionales, en infracción del principio general y de cualquier disposición de un tratado aplicable, produciría los efectos jurídicos anteriormente mencionados y además, no sería susceptible de reconocimiento jurídico internacional. Los procedimientos podrían ser iniciados por víctimas potenciales que ostentasen legitimación activa ante un órgano judicial internacional o nacional competente, con el fin de solicitarle que declarase que la medida nacional era contraria a derecho internacional; o que la víctima podría presentar una demanda civil por daños ante un tribunal extranjero, al que, consecuentemente se le pediría *inter alia*, que no tuviera en

cuenta el valor jurídico de la ley nacional impugnada. Lo que es aún más importante, es que los autores del delito de tortura que actúen amparados o se beneficien de esas medidas nacionales, podrán no obstante, ser considerados penalmente responsables por el delito de tortura, ya sea en un Estado extranjero, o en su propio Estado en un régimen posterior. En resumen, los individuos están obligados a cumplir con el principio de prohibición de la tortura aun cuando las instancias legislativas o judiciales nacionales amparen cualesquiera violaciones contra el mismo. Tal y como el Tribunal Militar Internacional de Núremberg lo expresó: 'los individuos tienen deberes internacionales que trascienden de las obligaciones nacionales de obediencia impuestas por un Estado en particular.'

O. Convención Americana de Derechos Humanos⁶

56. La parte relevante de esta Convención establece:

Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos

“1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano.”

P. Comisión Interamericana de Derechos Humanos⁷

1. *Asunto 10.287 (El Salvador), Informe núm. 26/92 de 24 de septiembre de 1992*

57. La masacre en Las Hojas, El Salvador en 1983, en la que alrededor de 74 personas fueron presuntamente asesinadas por miembros de las fuerzas armadas salvadoreñas con la participación de los miembros de la Defensa Civil dio lugar a una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En su informe de 1992 la Comisión formuló las consideraciones siguientes:

“... ”

La aplicación del Decreto de Amnistía constituye una clara violación de la obligación del Gobierno de El Salvador de investigar y sancionar las violaciones de los derechos de las víctimas de Las Hojas, y de proporcionar una reparación de los daños producidos por la violación.

6. Suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, San José, Costa Rica, de 22 de noviembre de 1969.

7. El texto de las decisiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos aparece reproducido del original en español de dichas decisiones, y no es traducción de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

...

... La referida Ley de Amnistía, aplicada a este caso, impide la eficacia de un recurso jurídico sobre el asesinato, trato inhumano y la ausencia de garantías judiciales; niega el carácter fundamental de los derechos humanos más básicos. La Amnistía elimina la medida tal vez más efectiva para poner en vigencia tales derechos: el enjuiciamiento y castigo de los autores.”

2. *Informe sobre la situación de los derechos humanos en El Salvador, Doc. OEA/Ser.L/II.85 Doc. 28 rev. (1 de junio de 1994)*

58. En 1994, en un informe sobre la situación de los Derechos Humanos en El Salvador, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló, en relación con la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz de El Salvador, lo siguiente:

“... independientemente de la eventual necesidad derivada de las negociaciones de paz, y de las razones eminentemente políticas, las amplísimas dimensiones de la ley general de amnistía (para la consolidación de la paz) aprobada por la Asamblea Legislativa de El Salvador constituyen una violación de las obligaciones internacionales asumidas por ese país al ratificar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al permitir una ‘amnistía recíproca’, sin un reconocimiento de responsabilidad...; su aplicación a crímenes de lesa humanidad; y porque elimina cualquier posibilidad de obtener una adecuada compensación patrimonial para las víctimas, principalmente.”

3. *Asunto 10.480 (El Salvador), Informe núm. 1/99 de 27 de enero de 1999*

59. En 1999, en un informe sobre un asunto relativo a la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz promulgada en El Salvador en 1993, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló:

“113. La Comisión debe destacar que [esta Ley] se aplicó a graves violaciones de derechos humanos ocurridos en El Salvador entre el 1º de enero de 1980 y el 1º de enero de 1992, incluidos aquellos examinados y establecidos por la Comisión de la Verdad. En particular, su efecto se extendió, entre otros, a delitos tales como las ejecuciones sumarias, la tortura y la desaparición forzada de personas practicadas por agentes del Estado. Algunos de estos delitos se consideran de tal gravedad que han justificado la adopción de Convenciones especiales sobre la materia y la inclusión de medidas específicas para evitar su impunidad, incluyendo la jurisdicción universal y la imprescriptibilidad de los delitos...”

...

115. La Comisión también hace notar, que el artículo 2 de [esta Ley] aparentemente se aplicó a todas las violaciones del artículo 3 general [de los Convenios de Ginebra de 1949] y del [Protocolo adicional II de 1977], cometidas por agentes del Estado durante el conflicto armado que tuvo lugar en El Salvador...

...

123. ... que al aprobar y aplicar la Ley General de Amnistía, el Estado salvadoreño violó el derecho a las garantías judiciales consagrado en el artículo 8.1 [de la Convención Americana de Derechos Humanos], en perjuicio de las víctimas sobrevivientes a las torturas y de los familiares de ..., que se vieron impedidos de obtener una compensación en los tribunales civiles; todo en relación con el artículo 1.1 de la Convención.

...

129. ... al promulgar y aplicar la Ley de Amnistía, El Salvador ha violado el derecho a la protección judicial consagrado en el artículo 25 [de la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969], en perjuicio de las víctimas sobrevivientes...”

En sus conclusiones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que El Salvador “ha violado igualmente, con respecto a las mismas personas, el artículo 3 general de los Cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y el artículo 4 del [Protocolo Adicional II de 1977]. Además, con el fin de garantizar los derechos de las víctimas, recomendó que El Salvador debería “en caso de ser necesario... dejar sin efecto *ex tunc* dicha ley”

Q. Corte Interamericana de Derechos Humanos

60. En su sentencia sobre el asunto *Barrios Altos contra Perú* (Fondo, sentencia de 14 de marzo de 2001), en donde se planteaba la cuestión acerca de la legalidad de las leyes de amnistía peruanas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sostuvo:

“41. Esta Corte considera que son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

42. La Corte, conforme a lo alegado por la Comisión y no controvertido por el Estado, considera que las leyes de amnistía adoptadas por el Perú impidieron que los familiares de las víctimas y las víctimas sobrevivientes en el presente caso fueran oídas por un juez ...; violaron el derecho a la protección judicial ...; impidieron la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y sanción de los responsables de los hechos ocurridos en Barrios Altos, incumpliendo el artículo 1.1 [de la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969], y obstruyeron el esclarecimiento de los hechos del caso. Finalmente, la adopción de las leyes de autoamnistía incompatibles con la [Convención Americana de Derechos Humanos de 1969] incumplió la obligación de adecuar el derecho interno consagrada en el artículo 2 de la [Convención Americana de Derechos Humanos de 1969].

43. La Corte estima necesario enfatizar que, a la luz de las obligaciones generales consagradas en los artículos 1.1 y 2 de la [Convención Americana de Derechos Humanos de 1969], los Estados Partes tienen el deber de tomar las providencias de toda índole para que nadie sea sustraído de la protección judicial y del ejercicio del derecho a un recurso sencillo y eficaz, en los términos de los artículos 8 y 25 de la [Convención Americana de Derechos Humanos de 1969]. Es por ello que los Estados Partes en la Convención que adopten leyes que tengan este efecto, como lo son las leyes de autoamnistía, incurrir en una violación de los artículos 8 y 25 en concordancia con los artículos 1.1 y 2 de la [Convención Americana de Derechos Humanos de 1969]. Las leyes de autoamnistía conducen a la indefensión de las víctimas y a la perpetuación de la impunidad, por lo que son manifiestamente incompatibles con la letra y el espíritu de la Convención Americana. Este tipo de leyes impide la identificación de los individuos responsables de violaciones a derechos humanos, ya que se obstaculiza la investigación y el acceso a la justicia e impide a las víctimas y a sus familiares conocer la verdad y recibir la reparación correspondiente.

44. Como consecuencia de la manifiesta incompatibilidad entre las leyes de autoamnistía y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, las mencionadas leyes carecen de efectos jurídicos y no pueden seguir representando un obstáculo para la investigación de los hechos que constituyen este caso ni para la identificación y el castigo de los responsables, ni puedan tener igual o similar impacto respecto de otros casos de violación de los derechos consagrados en la Convención Americana acontecidos en el Perú.”

En el voto concurrente del Juez, Antonio A. Cançado Trindade se añade:

“13. La responsabilidad internacional del Estado por violaciones de los derechos humanos internacionalmente consagrados, – incluidas las configuradas mediante la expedición y aplicación de leyes de autoamnistía, – y la responsabilidad penal individual de agentes perpetradores de violaciones graves de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario, son dos facetas de la misma medalla, en la lucha contra las atrocidades, la impunidad y la injusticia. Fue necesario esperar muchos años para poder llegar a esta constatación, la cual, si hoy es posible, también se debe, – me permito insistir en un punto que me es muy caro –, al *despertar de la conciencia jurídica universal*, como *fuerza material par excellence* del propio Derecho Internacional.”

61. En el asunto *Almonacid Arellano y otros contra Chile* (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, sentencia de 26 de septiembre de 2006), la Corte Interamericana de Derechos Humanos, señaló:

“154. En lo que toca al principio *ne bis in idem*, aun cuando es un derecho humano reconocido en el artículo 8.4 de la Convención Americana, no es un derecho absoluto y, por tanto, no resulta aplicable cuando: (i) la actuación del tribunal que conoció el caso y decidió sobreseer o absolver al responsable de una violación a los derechos humanos o al derecho internacional obedeció al propósito de sustraer al acusado de su responsabilidad penal; (ii) el procedimiento no fue instruido independiente o imparcialmente de conformidad con las debidas garantías procesales, o (iii) no hubo la intención real de someter al responsable a la acción de la justicia. Una sentencia pronunciada en las circunstancias indicadas produce una cosa juzgada ‘aparente’ o

‘fraudenta’. Por otro lado, esta Corte considera que si aparecen nuevos hechos o pruebas que puedan permitir la determinación de los responsables de violaciones a los derechos humanos, y más aún, de los responsables de crímenes de lesa humanidad, pueden ser reabiertas las investigaciones, incluso si existe un sentencia absolutoria en calidad de cosa juzgada, puesto que las exigencias de la justicia, los derechos de las víctimas y la letra y espíritu de la Convención Americana desplaza la protección del *ne bis in idem*.

155. En el presente caso, se cumplen dos de los supuestos señalados. En primer lugar, la causa fue llevada por tribunales que no guardaban la garantía de competencia, independencia e imparcialidad. En segundo lugar, la aplicación del Decreto Ley núm. 2.191 consistió en sustraer a los presuntos responsables de la acción de la justicia y dejar el crimen cometido en contra del señor Almonacid Arellano en la impunidad. En consecuencia, el Estado no puede auxiliarse en el principio de *ne bis in idem*, para no cumplir con lo ordenado por la Corte ...”

62. El mismo enfoque se siguió en el asunto *La Cantuta contra Perú* (Fondo, Reparaciones y Costas, sentencia de 29 de noviembre de 2006), donde la parte relevante establece lo siguiente:

“151. En este sentido, la Comisión y las representantes han alegado que el Estado se ha valido de la figura de la cosa juzgada para no sancionar a algunos supuestos autores intelectuales de estos hechos, aunque en ningún momento se configuró la cosa juzgada al haber sido procesados por un tribunal que no era competente, independiente e imparcial y no cumplía con los requisitos del juez natural. Por su parte, el Estado expresó que ‘la comprensión de otras personas que pudieran tener responsabilidad penal está sujeta a las eventuales nuevas a las que arribe el Ministerio Público y el Poder Judicial en la investigación y sanción de los hechos’, así como que ‘en la investigación preliminar del Ministerio Público la decisión de sobreseimiento adoptada por un tribunal militar carece de efectos jurídicos. Es decir, no se acepta que haya generado cosa juzgada’.

152. Este Tribunal ya había señalado en el *Caso Barrios Altos* que:

‘Este Tribunal considera que son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes en la responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de Derechos Humanos.’

153. Específicamente en relación con la figura de cosa juzgada, recientemente la Corte precisó que el principio *non bis in idem* no resulta aplicable cuando el procedimiento que culmina con el sobreseimiento de la causa o la absolución del responsable de una violación a los derechos humanos, constitutiva de una infracción del derecho internacional, ha sustraído al acusado de su responsabilidad penal, o cuando el procedimiento no fue instruido independiente o imparcialmente de conformidad con las debidas garantías procesales. Una sentencia pronunciada en las circunstancias indicadas produce una cosa juzgada ‘aparente’ o ‘fraudenta’.

154. En tal sentido, al presentar una denuncia contra los presuntos autores intelectuales de los hechos ..., en cuyo favor fue dispuesto un sobreseimiento en el fuero militar, la Procuraduría *Ad Hoc* estimó que es inadmisibles considerar el auto de sobreseimiento emitido por jueces militares, carentes de competencia e imparcialidad, y en el curso de un proceso encaminado a cubrir con un manto de impunidad, como un obstáculo legal a la promoción de la acción penal ni como sentencia firme, por lo que no tendría calidad de cosa juzgada.”

63. En el asunto *Anzualdo Castro contra Perú* (Excepción preliminar, Fondo y Reparaciones, sentencia de 22 de septiembre de 2009), la Corte Interamericana de Derechos Humanos, reiteró lo siguiente:

“182. ... El Estado debe eliminar todos los obstáculos, *de facto* y *de jure*, que impidan la debida investigación de los hechos y el desarrollo de los respectivos procesos judiciales, así como utilizar todos los medios disponibles para hacerlos expeditos, a fin de evitar la repetición de los hechos como los del presente caso. En particular, este es un caso de desaparición forzada ocurrido en un contexto de práctica o patrón sistemático de desapariciones perpetrada por agentes estatales, por lo que el Estado no podrá argüir ni aplicar ninguna ley ni disposición de derecho interno, existente o que se expida en el futuro, para eximirse de la orden de la Corte de investigar y, en su caso, sancionar penalmente a los responsables de los hechos. Por esa razón, tal como lo ordenó este Tribunal desde la emisión de la Sentencia en el caso *Barrios Altos Vs. Perú*, el Estado no podrá volver a aplicar las leyes de amnistía, las cuales no tienen efectos ni los generarán en el futuro ..., ni podrá argumentar prescripción, irretroactividad de la ley penal, cosa juzgada, no el principio *ne bis in idem* o cualquier excluyente similar de responsabilidad para excusarse de esta obligación.”

64. En el asunto *Gelman contra Uruguay* (Fondo y Reparaciones, sentencia de 24 de febrero de 2011), la Corte Interamericana analizó detenidamente la posición del derecho internacional en relación con las amnistías concedidas por infracciones graves de los derechos fundamentales. En lo que aquí es relevante, la sentencia establece lo siguiente:

“184. La obligación de investigar violaciones de derechos humanos se encuentra dentro de las medidas positivas que deben adoptar los Estados para garantizar los derechos reconocidos en la Convención. El deber de investigar es una obligación de medios y no de resultado, que debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa, o como una mera gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de las víctimas, de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios.

...

189. La referida obligación internacional de procesar y, si se determina su responsabilidad penal, sancionar a los autores de las violaciones de derechos humanos, se desprende de la obligación de garantía consagrada en el artículo 1.1 de la Convención Americana. Esta obligación implica el deber de los Estados Parte de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos.

190. Como consecuencia de esta obligación, los Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Convención y procurar, además, el restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los daños producidos por la violación de los derechos humanos.

191. Si el aparato del Estado actúa de modo que tal violación quede impune y no se restablece, en cuanto sea posible, a la víctima en la plenitud de sus derechos, puede afirmarse que ha incumplido el deber de garantizar su libre y pleno ejercicio a las personas sujetas a su jurisdicción.

...

195. Las amnistías o figuras análogas han sido uno de los obstáculos alegados por algunos Estados para investigar y, en su caso, sancionar a los responsables de violaciones graves a los derechos humanos. Este Tribunal, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los órganos de las Naciones Unidas y otros organismos universales y regionales de protección de los derechos humanos se han pronunciado sobre la incompatibilidad de las leyes de amnistía relativas a graves violaciones de los derechos humanos con el derecho internacional y con las obligaciones internacionales de los Estados.

196. Como ya ha sido adelantado, esta Corte se ha pronunciado sobre la incompatibilidad de las amnistías con la Convención Americana en casos de graves violaciones de los derechos humanos relativos a Perú (*Barrios Altos y La Cantuta*), Chile (*Almonacid Arellano y otros*) y Brasil (*Gomes Lund y otros*).

197. En el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, del cual Uruguay forma parte por decisión soberana, son reiterados los pronunciamientos sobre la incompatibilidad de las leyes de amnistía con las obligaciones convencionales de los Estados cuando se trata de graves violaciones de los derechos humanos. Además de las decisiones antes mencionadas de este Tribunal, la Comisión Interamericana ha concluido, en el presente caso y en otros relativos a Argentina, Chile, El Salvador, Haití, Perú y Uruguay, su contrariedad con el derecho internacional. Asimismo, la Comisión ha recordado que:

‘Se ha pronunciado en un número de casos claves en los cuales ha tenido la oportunidad de expresar su punto de vista y cristalizar su doctrina en materia de aplicación de leyes de amnistía, estableciendo que dichas leyes violan diversas disposiciones tanto de la Declaración Americana como de la Convención. Estas decisiones, coincidentes con el criterio de otros órganos internacionales de derechos humanos respecto a las amnistías, han declarado de forma uniforme que tanto las leyes de amnistía como las medidas legislativas comparables que impiden o dan por terminada la investigación y juzgamiento de los agentes de un Estado que puedan ser responsables de serias violaciones de la Convención o de la Declaración Americana, violan múltiples disposiciones de estos instrumentos.’

198. En el ámbito universal, en su informe al Consejo de Seguridad titulado *El Estado de derecho y la justicia de transición en las sociedades que sufren o han sufrido conflictos*, el Secretario General de las Naciones Unidas señaló que:

‘... los acuerdos de paz aprobados por las Naciones Unidas nunca pueden prometer amnistías por crímenes de genocidio, de guerra, o de lesa humanidad o infracciones graves de los derechos humanos ...’

199. En el mismo sentido, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos concluyó que las amnistías y otras medidas análogas contribuyen a la impunidad y constituyen un obstáculo para el derecho a la verdad al oponerse a una investigación a fondo sobre los hechos y que son, por lo tanto, incompatibles con las obligaciones que incumben a los Estados en virtud de diversas fuentes de derecho internacional. Adicionalmente, en cuanto al falso dilema entre paz o reconciliación y la justicia, manifestó que:

‘Las amnistías que exoneran de sanción penal a los responsables de crímenes atroces en la esperanza de garantizar la paz suelen fracasar en el logro de su objetivo, y en lugar de ello han alentado a sus beneficiarios a cometer nuevos crímenes. Por el contrario, se ha llegado a acuerdos de paz sin disposiciones relativas a la amnistía en algunas situaciones en que se había dicho que la amnistía era una condición necesaria para la paz y en que muchos temían que los enjuiciamientos prolongaran el conflicto.’

200. En consonancia con lo anterior, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la cuestión de la impunidad destacó que:

‘Los autores de violaciones no podrán beneficiarse de la amnistía mientras las víctimas no hayan obtenido justicia mediante un recurso efectivo. Jurídicamente carecerá de efecto con respecto a las acciones de las víctimas vinculadas al derecho de reparación.’

201. La Asamblea General de Naciones Unidas estableció en el artículo 18 de la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas que ‘los autores o presuntos autores [desaparición forzada] no se beneficiaran de ninguna ley de amnistía especial u otras medidas análogas que tengan por efecto exonerarlos de cualquier procedimiento o sanción penal’.

202. De igual modo, la Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrada en Viena en 1993, en su Declaración y Programa de Acción enfatizó que los Estados ‘deben derogar la legislación que favorezca la impunidad de los responsables de violaciones graves de los derechos humanos, ... y sancionar las violaciones’, destacando que en casos de desapariciones forzadas los Estados están obligados primero a impedir las y, una vez que han ocurrido, a enjuiciar a los autores del hecho.

203. Por su parte, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de las Naciones Unidas ha tratado en distintas ocasiones el tema de las amnistías en casos de desapariciones forzadas. En su Observación General respecto del artículo 18 de la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, señaló que se considera que una ley de amnistía es contraria a las disposiciones de la Declaración, incluso cuando haya sido aprobada en referendo o procedimiento de consulta similar, si, directa o indirectamente, a causa de su aplicación o implementación cesa la obligación de un Estado de investigar, procesar

y sancionar a los responsables de las desapariciones, si oculta el nombre de quienes la hayan perpetrado o si los exonera.

204. Adicionalmente, el mismo Grupo de Trabajo manifestó su preocupación que en situaciones post-conflicto se promulguen leyes de amnistía o se adopten otras medidas que tengan por efecto la impunidad, y recordó a los Estados que:

‘es fundamental adoptar medidas efectivas de prevención para que no haya desapariciones. Entre ellas, destaca ... el procesamiento de todas las personas acusadas de cometer actos de desaparición forzada, la garantía de que sean enjuiciadas ante tribunales civiles competentes y que no se acojan a ninguna ley especial de amnistía o medidas análogas que puedan eximir las de acciones o sanciones penales, y la concesión de una reparación e indemnización adecuada a las víctimas y sus familiares.’

205. También en el ámbito universal, los órganos de protección de derechos humanos establecidos por tratados han mantenido el mismo criterio sobre la prohibición de amnistías que impidan la investigación y sanción de quienes cometan graves violaciones a los derechos humanos. El Comité de Derechos Humanos, en su Observación General 31, manifestó que los Estados deben asegurar que los culpables de infracciones reconocidas como delitos en el derecho internacional o en la legislación nacional, entre ellos la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, las privaciones de vida sumarias y arbitrarias y las desapariciones forzadas, comparezcan ante la justicia y no traten de eximir a los autores de su responsabilidad jurídica, como ha ocurrido con ciertas amnistías.

206. Asimismo, el Comité de Derechos Humanos también se pronunció al respecto en el procedimiento de peticiones individuales y en sus informes sobre países. En el *Caso Hugo Rodríguez Vs. Uruguay* señaló que no se puede aceptar la postura de un Estado de no estar obligado a investigar violaciones de derechos humanos cometidas durante un régimen anterior en virtud de una ley de amnistía y reafirmó que las amnistías para violaciones graves a los derechos humanos son incompatibles con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, indicando que las mismas contribuyen a crear una atmósfera de impunidad que puede socavar el orden democrático y dar lugar a otras graves violaciones de los derechos humanos.

...

209. Igualmente en el ámbito universal, aunque en otra rama del derecho internacional como lo es el derecho penal internacional, las amnistías o normas análogas también han sido consideradas inadmisibles. El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, en un caso relativo a tortura, consideró que carecería de sentido, por un lado, sostener la prescripción de violaciones graves de los derechos humanos y, por el otro lado, autorizar medidas estatales que las autoricen o condonen, o leyes de amnistía que absuelvan a sus autores. En el mismo sentido, el Tribunal Especial para Sierra Leona consideró que las leyes de amnistía de ese país no son aplicables a graves crímenes internacionales. Esta tendencia universal se ha visto consolidada mediante la incorporación del estándar mencionado en la elaboración de los estatutos de los tribunales especiales de más reciente creación en el ámbito de las Naciones Unidas. En

este sentido, tanto los Acuerdos de las Naciones Unidas con la República del Líbano y con el Reino de Camboya, como los Estatutos que crean el Tribunal Especial para el Líbano, el Tribunal Especial para Sierra Leona y las Salas Extraordinarias de las Cortes de Camboya, han incluido en sus textos cláusulas que señalan que las amnistías que sean concedidas no constituirán un impedimento para el procesamiento de las personas responsables de los delitos que se encuentren dentro de la jurisdicción de dichos tribunales.

210. Asimismo, en una interpretación del artículo 6.5 del Protocolo II Adicional a los Convenios de Ginebra a la luz del Derecho Internacional Humanitario, el CICR aclaró que las amnistías no podían amparar a los perpetradores de crímenes de guerra:

‘Cuando se aprobó el párrafo 5 del artículo 6 del Protocolo adicional II, la URSS declaró, en su explicación de voto, que no podía interpretarse la disposición de modo que permitiese a los criminales de guerra, u otras personas culpables de crímenes de lesa humanidad, eludir un castigo severo. El CICR coincide con esa interpretación. Esas amnistías serían también incompatibles con la norma que obliga a los Estados a investigar y enjuiciar a los sospechosos de haber cometido crímenes de guerra en conflictos armados no internacionales ...’

211. Esta norma de Derecho Internacional Humanitario e interpretación del protocolo II artículo 6.5 ha sido retomada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

212. La contrariedad de las amnistías relativas a violaciones graves de los derechos humanos con el derecho internacional ha sido afirmada también por los tribunales y órganos de todos los sistemas regionales de protección de derechos humanos.

213. En el Sistema Europeo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que es de la mayor importancia, para efectos de un recurso efectivo, que los procesos penales referentes a crímenes como la tortura, que impliquen violaciones graves a los derechos humanos no sean prescriptibles y que no se deban permitir amnistías o perdones al respecto. En otros casos, resaltó que cuando un agente estatal es acusado de crímenes que violan los derechos del artículo [2] del Convenio Europeo (Derecho a la vida), los procedimientos penales y el juzgamiento no deben verse obstaculizados y la concesión de la amnistía no es permisible.

214. En el Sistema Africano, la Comisión Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos consideró que las leyes de amnistía no pueden proteger al Estado que las adopta de cumplir con sus obligaciones internacionales y señaló, además, que al prohibir el enjuiciamiento de perpetradores de violaciones graves a derechos humanos mediante otorgamiento de amnistías, los Estados no solo promovían la impunidad, sino que también cerraban la posibilidad de que dichos abusos se investigaran y que las víctimas de dichos crímenes tuvieran un recurso efectivo para obtener una reparación.

...

F. Las amnistías y la jurisprudencia de esta Corte

225. Esta Corte ha establecido que ‘son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad

que pretendan impedir la investigación y la sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos’.

226. En ese sentido, las leyes de amnistía, en casos de graves violaciones a los derechos humanos, son manifiestamente incompatibles con la letra y el espíritu del Pacto de San José, pues infringen lo dispuesto por sus artículos 1.1 y 1.2, es decir, en cuanto impiden la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos y, consecuentemente, el acceso de las víctimas y sus familiares a la verdad de lo ocurrido y a las reparaciones correspondientes, obstaculizando así el pleno, oportuno y efectivo imperio de la justicia en los casos pertinentes, favoreciendo, en cambio, la impunidad y la arbitrariedad, afectando además seriamente el estado de derecho, motivos por los que se ha declarado que, a la luz del Derecho Internacional, ellas carecen de efectos jurídicos.

227. En especial, las leyes de amnistías afectan el deber internacional del Estado de investigar y sancionar las graves violaciones de los derechos humanos al impedir que los familiares de las víctimas sean oídos por un juez, conforme a lo señalado en el artículo 8.1 de la Convención Americana y violan el derecho a la protección judicial consagrado en el artículo 25 de la Convención, precisamente por la falta de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y sanción de los responsables de los hechos, incumpliendo asimismo el artículo 1.1 de la Convención.

228. A la luz de las obligaciones generales consagradas en los artículos 1.1 y 1.2 de la Convención Americana, los Estados Parte tienen el deber de adoptar providencias de toda índole para que nadie sea sustraído de la protección judicial y del ejercicio del derecho a un recurso sencillo y eficaz, en los términos de los artículos 8 y 25 de la Convención y, una vez ratificada la Convención Americana, corresponde al Estado, de conformidad con el artículo 2 de la misma, adoptar todas las medidas para dejar sin efecto las disposiciones legales que pudieran contravenirla, como son las que impiden la investigación de graves violaciones de los derechos humanos puesto que conducen a la indefensión de las víctimas y a la perpetuación de la impunidad, además que impiden a las víctimas y a sus familiares conocer la verdad de los hechos.

229. La incompatibilidad respecto de la Convención incluye a las amnistías de graves violaciones de los derechos humanos y no se restringe solo a las denominadas ‘autoamnistías’ y ello en atención, más que al proceso de adopción y a la autoridad que emitió la ley de amnistía, a su *ratio legis*: dejar impunes las graves violaciones al derecho internacional cometidas. La incompatibilidad de las leyes de amnistía con la Convención Americana en casos de graves violaciones de derechos humanos no deriva de una cuestión formal, como su origen, sino del aspecto material en cuanto violan los derechos consagrados en los artículos 8 y 25, en relación con los artículos 1.1 y 1.2 de la Convención.

G. La investigación de los hechos y la Ley de Caducidad

...

240. ... al aplicar la Ley de Caducidad (que por sus efectos constituye una ley de amnistía) y por tanto impidiendo la investigación de los hechos y la identificación, juzgamiento y eventual sanción de los posibles responsables de violaciones continuadas y permanentes como las desapariciones forzadas, se incumple con la obligación de adecuar el derecho interno del Estado, consagrada en el artículo 2 de la Convención Americana.”

65. En el asunto *Gomes Lund y otros (“Guerrilha do Araguaia”) contra Brasil* (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, sentencia de 24 de noviembre de 2010), la Corte Interamericana de nuevo se opuso rotundamente a la concesión de amnistías en relación a infracciones graves de los derechos fundamentales. Después de basarse en las mismas normas de derecho internacional que en el asunto *Gelman*, citado, sostuvo, en lo que aquí es de relevancia, lo siguiente:

“170. Como se desprende de lo contenido en los apartados precedentes, todos los órganos internacionales de protección de los derechos humanos y diversas altas cortes nacionales de la región que han tenido la oportunidad de pronunciarse respecto del alcance de las leyes de amnistía sobre graves violaciones de derechos humanos y su incompatibilidad con las obligaciones internacionales de los Estados que las emiten, han concluido que las mismas violan el deber internacional del Estado de investigar y sancionar dichas violaciones.

171. Este Tribunal ya se ha pronunciado anteriormente sobre el tema y no encuentra fundamentos jurídicos para apartarse de su jurisprudencia constante, la cual además, concuerda con lo establecido unánimemente por el derecho internacional y por los precedentes de los órganos de los sistemas universales y regionales de protección de los derechos humanos. De tal modo, a efectos del presente caso, el Tribunal reitera que ‘son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir los derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos’.

...

175. En cuanto a lo alegado por las partes respecto de si se trató de una amnistía, una autoamnistía o un ‘acuerdo político’, la Corte observa, como se desprende del criterio reiterado en el presente caso (*supra* párr. 171), que la incompatibilidad respecto de la Convención incluye a las amnistías de graves violaciones de los derechos humanos y no se restringe sólo a las denominadas ‘autoamnistías’. Asimismo, como ha sido señalado anteriormente, el Tribunal, más que al proceso de adopción y a la autoridad que emitió la Ley de Amnistía, atiende a su *ratio legis*: dejar impunes graves violaciones al derecho internacional cometidas por el régimen militar. La incompatibilidad de las leyes de amnistía con la Convención Americana en casos de graves violaciones de derechos humanos no deriva de una cuestión formal, como su origen, sino del aspecto material en cuanto a que violan los derechos consagrados en los artículos 8 y 25, en relación con los artículos 1.1 y 1.2 de la Convención.

176. Este Tribunal ha establecido en su jurisprudencia que es consciente que las autoridades internas están sujetas al imperio de la ley y, por ello, están obligadas a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado es Parte de un tratado internacional como la Convención Americana, todos sus órganos, incluidos sus jueces, también están sometidos a aquel, lo cual les obliga a velar porque que los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. El Poder Judicial, en tal sentido, está internacionalmente obligado a ejercer un ‘control de convencionalidad’ *ex officio* entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, interprete última de la Convención Americana.”

66. Más recientemente, en el asunto *Masacres de el Mozote y lugares aledaños contra El Salvador* (Fondo, Reparaciones y Costas, sentencia de 25 de octubre de 2012), la Corte Interamericana, en lo que aquí es relevante, sostuvo lo siguiente (omitidos los pies de página):

“283. Ya ha sido expuesto y desarrollado ampliamente en los casos *Gomes Lund Vs. Brasily Gelman Vs. Uruguay*, resueltos por esta Corte en el ámbito de su competencia jurisdiccional, como este Tribunal, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los órganos de las Naciones Unidas; otros organismos regionales de protección de los derechos humanos; y otros tribunales del ámbito del derecho penal internacional se han pronunciado sobre la incompatibilidad de las leyes de amnistía relativas a graves violaciones de derechos humanos con el derecho internacional y las obligaciones internacionales de los Estados. Esto es debido a que las amnistías o figuras análogas han sido uno de los obstáculos invocados por algunos Estados para no cumplir con su obligación de investigar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos. Igualmente, diversos Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos, por medio de sus más altos tribunales de justicia, han incorporado los estándares mencionados, observando de buena fe sus obligaciones internacionales. De tal modo, a efectos del presente caso, el Tribunal reitera que ‘son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir los derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos’.

284. Sin embargo y a diferencia de los casos abordados anteriormente por este Tribunal, en el presente caso se trata de una ley de amnistía general que se refiere a hechos cometidos en el contexto de un conflicto armado interno. Por ello, la Corte estima pertinente, al realizar el análisis de la compatibilidad de la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz con las obligaciones internacionales derivadas de la Convención Americana y su aplicación al caso de las Masacres de El Mozote y lugares aledaños, hacerlo también a la luz de lo establecido en el Protocolo II adicional

de los Convenios de Ginebra de 1949 así como de los términos específicos en que se acordó el cese de las hostilidades que pusieron fin al conflicto en El Salvador y, en particular, del Capítulo I ('Fuerzas Armadas'), punto 5 ('Cese de la Impunidad'), del Acuerdo de Paz de 16 de enero de 1992.

285. Según el Derecho Internacional Humanitario aplicable a estas situaciones, se justifica en ocasiones la aprobación de leyes de amnistía para el cese de las hostilidades en los conflictos armados de carácter no internacional para posibilitar el retorno a la paz. En efecto, el artículo 6.5 del Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 prevé que:

'A la cesación de las hostilidades, las autoridades en el poder procuraran conceder la amnistía lo más amplia posible a las personas que hayan formado parte en el conflicto armado o que se encuentren privadas de libertad, internadas o detenidas por motivos relacionados con el conflicto armado.'

286. Sin embargo, esta norma no es absoluta, en tanto que también existe en el Derecho Internacional Humanitario una obligación de los Estados de investigar y juzgar crímenes de guerra. Por esta razón, 'las personas sospechosas o acusadas de haber cometido crímenes de guerra, o que estén condenadas por ello' no podrán estar cubiertas por una amnistía. Por consiguiente, puede entenderse que el artículo 6.5 del Protocolo II adicional, se refiere a amnistías amplias respecto de quienes hayan participado en el conflicto armado no internacional o se encuentren privados de libertad por razones relacionadas con el conflicto armado, siempre que no se trate de hechos que, como los del presente caso, cabrían en la categoría de crímenes de guerra, e incluso en la categoría de crímenes contra humanidad."

R. Cámaras Extraordinarias en las Cortes de Camboya

67. Las Cámaras Extraordinarias en las Cortes de Camboya analizaron los efectos de la amnistía en el procesamiento de los autores de crímenes en su decisión sobre el recurso interpuesto por Ieng Sary contra la orden de cierre (asunto núm. 002/19 09-2007-ECCC/OCIJ (PTC75) de 11 de abril de 2011):

"199. Los delitos imputados en la orden de cierre, a saber, genocidio, crímenes contra la humanidad, violaciones graves de los Convenios de Ginebra, así como el homicidio, la tortura y la persecución religiosa como delitos nacionales, no se encuentran tipificados en la Ley de 1994, y por tanto, se continuarían enjuiciando en virtud de la legislación existente, ya sea en virtud del derecho penal nacional o internacional, aun cuando se hubieran cometido por presuntos miembros del grupo Kampuchea Democrática.

...

201. La interpretación del Decreto propuesto por los abogados de Ieng Sary, que le otorgaría a Ieng Sary una amnistía por todos los delitos cometidos durante la época de los Jemeres Rojos, incluidos todos los delitos imputados en la orden de cierre, no solo se aparta del texto del Decreto, interpretado a la luz de la Ley de 1994, sino que también

es incompatible con las obligaciones internacionales de Camboya. En la medida en que el caso concierne genocidio, tortura y graves violaciones de los Convenios de Ginebra, la concesión de una amnistía, sin ningún tipo de enjuiciamiento y sanción, infringirían las obligaciones convencionales de Camboya de enjuiciar y condenar a los autores de dichos delitos, tal y como se establece en la Convención sobre el Genocidio, la Convención contra la Tortura y los Convenios de Ginebra. Camboya, que ha ratificado el PIDCP, tenía y continúa teniendo la obligación de asegurar que las víctimas de crímenes contra la humanidad, que por definición, causan graves violaciones de los derechos humanos, gozaran y gocen de un recurso efectivo. Esta obligación requeriría en términos generales que el Estado enjuicie y condene a los autores de violaciones. La concesión de amnistías, las cuales implican la abolición y el olvido de los crímenes contra la humanidad, no compliría con la obligación de Camboya en virtud del ICCPR de enjuiciar y condenar a los autores de graves violaciones de los derechos humanos o en caso contrario, de proporcionar un recurso efectivo a las víctimas. Ya que no hay indicios de que el Rey (y otros involucrados) no tratasen de respetar las obligaciones internacionales de Camboya cuando aprobaron el Decreto, la interpretación de este documento invocado por los abogados debe ser desestimada por infundada.”

S. Tribunal Especial para Sierra Leona

68. El 13 de marzo de 2004, la Sala de Apelación del Tribunal Especial para Sierra Leona, en los asuntos núm. SCSL-2004-15-AR72(E) y SCSL-2004-16-AR72(E), adoptó su resolución sobre la impugnación de jurisdicción: Acuerdo de paz en Lomé, en la que estableció lo siguiente:

“82. La alegación de la Fiscalía relativa a la existencia de ‘una norma internacional que está tomando cuerpo y, en virtud de la cual, un gobierno no puede conceder amnistía por la comisión de graves violaciones tipificadas en el derecho internacional’ se encuentra ampliamente respaldada por los documentos en posesión de este Tribunal. La opinión de ambos *amicus curiae* según la cual, dicha norma estaría ya cristalizada en el derecho internacional no es del todo correcta, pero lo anterior no es razón para que este tribunal, al formar su convicción sobre el caso, ignore la rotundidad de la alegación de la Fiscalía y la relevancia de los documentos aportados ante este Tribunal. Se acepta que dicha norma se está desarrollando en el marco del derecho internacional. El letrado de Kallon sostuvo que, hasta el día de la fecha, la postura de que las amnistías son ilegales no goza de una aceptación universal. Sin embargo, tal y como ha sido señalado insistentemente por el profesor Orentlicher, existen varios tratados que requieren el enjuiciamiento de dichos delitos. Entre estos, se encuentran la Convención de 1948 para la Prevención y Sanción del delito de Genocidio, la Convención contra la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, y los cuatro Convenios de Ginebra. Existen también un gran número de resoluciones dictadas por la Asamblea General y por el Consejo de Seguridad de la ONU, que reafirman la obligación de un Estado de enjuiciar o llevar ante la justicia estos delitos. La organización Redress ha añadido a sus alegaciones por escrito documentación que incluye conclusiones en estos términos del Comité contra la tortura, constataciones de la Comisión de Derechos Humanos y sentencias relevantes dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

...

84. Incluso en el caso de que se considerase que Sierra Leona no habría infringido el derecho consuetudinario al conceder la amnistía, este tribunal está autorizado, en el ejercicio de su facultad discrecional, para dar escasa o ninguna virtualidad a la concesión de dicha amnistía que es contraria al sentido en que el derecho internacional consuetudinario se está desarrollando y que es contraria a las obligaciones impuestas en ciertos tratados y convenios, cuya finalidad es proteger a la humanidad.”

FUNDAMENTOS DE DERECHO

...

II. SOBRE LA VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 4 DEL PROTOCOLO NÚM. 7 AL CONVENIO

92. El demandante se queja de que los delitos que trajeron causa a los procedimientos finalizados en 1997 y los delitos por los que fue declarado culpable en 2007, eran los mismos. Invoca el artículo 4 del Protocolo núm. 7 del Convenio, que dispone lo siguiente:

“1. Nadie podrá ser perseguido o condenado penalmente por los tribunales del mismo Estado, por una infracción por la que ya hubiera sido absuelto o condenado en virtud de sentencia firme conforme a la ley y al procedimiento penal de ese Estado.

2. Lo dispuesto en el párrafo anterior no impedirá la reapertura del proceso, conforme a la ley y al procedimiento penal del Estado interesado, cuando hechos nuevos o ulteriormente conocidos o un vicio esencial en el procedimiento anterior pudieran afectar a la sentencia dictada.

3. No se autorizará derogación alguna del presente artículo en virtud del artículo 15 del Convenio.”

A. Compatibilidad *ratione temporis*

1. Conclusiones de la Sala

93. En su sentencia de 13 de noviembre de 2012, la Sala declaró que la queja en virtud del artículo 4 del Protocolo núm. 7 del Convenio era compatible *ratione temporis* con el Convenio. Sostuvo lo siguiente:

“58. El Tribunal observa que, efectivamente, el primer procedimiento penal contra el demandante finalizó antes de la entrada en vigor del Convenio en Croacia. Sin embargo, el segundo procedimiento penal en el que el demandante fue declarado culpable de crímenes de guerra contra la población civil, fue sustanciado y finalizado después del 5 de noviembre de 1997, fecha en la que Croacia ratificó el Convenio. El derecho a no ser juzgado o condenado dos veces por los mismo hechos, no se puede excluir en relación a un procedimiento sustanciado antes de la fecha de ratificación del Convenio, si la persona ha sido condenada por el mismo delito con posterioridad

dicha fecha de ratificación. El mero hecho de que el primer procedimiento finalizase antes de dicha fecha, no impide que este Tribunal tenga competencia *ratione temporis* en el presente caso.”

2. Alegaciones de las partes ante la Gran Sala

94. El Gobierno alega que la decisión judicial que concedió la amnistía al demandante había sido adoptada el 24 de junio de 1997, y había sido notificada al demandante el 2 de julio de 1997, mientras que el Convenio entró en vigor en Croacia el 5 de noviembre de 1997. Por lo tanto, dicha decisión judicial no está sujeta a la jurisdicción *ratione temporis* del Tribunal.

95. El demandante no hace ninguna alegación en este sentido.

3. Valoración de la Gran Sala

96. La decisión judicial que concedía al demandante la amnistía fue dictada el 24 de junio de 1997, mientras que el Convenio entró en vigor en Croacia el 5 de noviembre de 1997 y el Protocolo núm. 7 entró en vigor el 1 de febrero de 1998. Por lo tanto, la cuestión acerca de la competencia *ratione temporis* de este Tribunal debe ser abordada.

97. La Gran Sala suscribe las conclusiones de la Sala sobre la compatibilidad *ratione temporis* con el Convenio de la queja del demandante en virtud del artículo 4 del Protocolo núm. 7. Se remite asimismo al razonamiento de la Comisión en el asunto *Gradinger contra Austria* (de 19 de mayo de 1994, opinión de la Comisión, §§ 67 a 69, Serie A, núm. 328-C):

“67. La Comisión recuerda que, de conformidad con las normas reconocidas con carácter general en derecho internacional, el Convenio y sus Protocolos son vinculantes para las Partes Contratantes únicamente con respecto a los hechos ocurridos después de la entrada en vigor del Convenio o del Protocolo con respecto a esa Parte Contratante.

68. La propia naturaleza del derecho enunciado en el artículo 4 del Protocolo núm. 7 implica que hayan tenido lugar dos procedimientos: un primer procedimiento en el que la persona en cuestión haya sido ‘absuelta o condenada en virtud de un pronunciamiento judicial definitivo’, y procedimiento posterior, en el que esa misma persona ‘sea susceptible de ser juzgada o condenada de nuevo’ dentro de la misma jurisdicción.

69. La Comisión recuerda además, que al examinar la equidad del procedimiento, tiene competencia para tomar en consideración hechos anteriores a la entrada en vigor del Convenio con respecto a un Estado cuando la constatación de dichos hechos anteriores se incorpora en una sentencia dictada con posterioridad a dicha entrada en vigor (véase *X contra Portugal*, núm. 9453/81, decisión de la Comisión de 13 de diciembre de 1982, DR 31, pg. 204, § 209). El elemento esencial del artículo 4 del Protocolo núm. 7 es el riesgo a ser juzgado o condenado ‘de nuevo’. El primer procedimiento, se limita a proporcionar el telón de fondo para el examen que se realizará

durante el segundo procedimiento. En el presente caso, la Comisión considera que, en tanto en cuanto, la sentencia final en el segundo procedimiento se dictó después de la entrada en vigor del Protocolo núm. 7, la Comisión es competente *ratione temporis* para tratar la queja. Dado que el Protocolo núm. 7 entró en vigor el 1 de noviembre de 1988 y el 30 de junio de 1989, Austria hizo una declaración en relación al artículo 7 párrafo 2 de dicho Protocolo, en virtud de la cual, no excluía su efecto retroactivo (*X. contra Francia*, núm. 9587/81, decisión de la Comisión de 13 de diciembre de 1982, DR 29 pg. 228, § 238); y dado que la sentencia final del Tribunal Administrativo es de 29 de marzo de 1989, la Comisión considera que competente *rationis temporis*, para examinar este aspecto del caso.”

98. Por consiguiente, la Gran Sala no ve ninguna razón para apartarse de la decisión de la Sala de rechazar la excepción de inadmisibilidad por falta de jurisdicción *ratione temporis* presentada por el Gobierno.

B. Aplicabilidad del artículo 4 del Protocolo núm. 7

1. Conclusiones de la Sala

99. En primer lugar, la Sala llegó a la conclusión de que los delitos por los que el demandante había sido enjuiciado tanto en el primer como en el segundo procedimiento eran los mismos. Dejó abierta la cuestión de si la decisión que concedió la amnistía al demandante podría considerarse como una sentencia firme o como una absolución a los efectos del artículo 4 del Protocolo núm. 7 y procedió a examinar la queja sobre el fondo en virtud de las excepciones previstas en el apartado 2 del artículo 4 del Protocolo núm. 7. La Sala suscribió la conclusión del Tribunal Supremo en el sentido de que la Ley de Amnistía General había sido aplicada de forma errónea en el caso del demandante y consideró que la concesión de la amnistía con respecto a los actos constitutivos de crímenes de guerra cometidos por el demandante, representaba un “vicio fundamental” de dicho procedimiento, lo que permitía que el demandante fuese juzgado de nuevo.

2. Alegaciones de las partes ante la Gran Sala

a. El demandante

100. El demandante sostiene que los delitos en los dos procedimientos penales seguidos contra él tenían la misma base fáctica y que la calificación jurídica de los delitos como crímenes de guerra en el segundo procedimiento no puede alterar el hecho de que los cargos eran sustancialmente idénticos.

101. Sostiene además, que una decisión que concede la amnistía a un acusado equivale a una sentencia firme que impide la celebración de un nuevo juicio.

b. El Gobierno

102. En sus observaciones escritas, el Gobierno sostuvo que en el primer procedimiento el Tribunal del Condado de Osijek, había aplicado la Ley de Amnistía General sin haber fijado los hechos del caso y sin haber decidido sobre la culpabilidad del demandante. Por lo tanto, la decisión fue adoptada sin haber dado una respuesta a la cuestión de si el demandante había cometido los delitos por los que fue acusado, y sin examinar los cargos contenidos en el escrito de acusación. Por tanto, la decisión no había desplegado efecto de cosa juzgada (véase párrafo 33 de las Observaciones del Gobierno). Sin embargo, el Gobierno sostuvo seguidamente que la decisión cumplía con todos los requerimiento de la cosa juzgada y que, por lo tanto, podía ser considerada como una absolución o condena definitiva a los efectos del artículo 4 del Protocolo núm. 7 (véase párrafo 37 de las Observaciones del Gobierno).

103. Asimismo, el Gobierno alegó, refiriéndose profusamente a las conclusiones de la Sala, que la amnistía no puede concederse con respecto a crímenes de guerra y que la concesión de la amnistía había supuesto un defecto esencial del procedimiento.

104. Tras la finalización del primer procedimiento se habían conocido nuevos hechos, a saber, que las víctimas habían sido detenidas y torturadas antes de ser asesinadas. Estos nuevos elementos habían sido suficientes para que los actos en cuestión fueran calificados como crímenes de guerra contra la población civil, y no como asesinatos “ordinarios”.

105. La Ley de Amnistía General había sido promulgada con el propósito de que Croacia cumpliera con los compromisos internacionales derivados del Acuerdo sobre Normalización de las Relaciones entre la República de Croacia y la República de Yugoslavia, y su objetivo principal había sido promover la reconciliación en la sociedad croata en un tiempo en el que la guerra proseguía. Según el Gobierno, esta ley excluía expresamente a los crímenes de guerra de su ámbito de aplicación.

106. En el caso del demandante, la Ley de Amnistía General había sido aplicada en contra de su propia finalidad, así como de las obligaciones internacionales de Croacia, incluidas las previstas en los artículos 2 y 3 del Convenio.

107. En cuanto a los procedimientos iniciados por las autoridades nacionales, el Gobierno sostuvo que los procedimientos contra el demandante habían sido equitativos, sin avanzar ningún argumento en cuanto a si los procedimientos fueron llevados a cabo de conformidad con las disposiciones establecidas en el Código de Enjuiciamiento Penal.

c. Terceras partes intervinientes

108. El grupo de expertos académicos sostiene que ningún tratado multilateral prohíbe expresamente la concesión de amnistías por crímenes internacionales. La interpretación del Comité Internacional de la Cruz Roja (el “CICR”) sobre el artículo 6.5 del Protocolo Adicional II de los Convenios de Ginebra, sugiere que los Estados pueden no conceder la amnistía a aquellas personas sospechosas, acusadas o condenadas por crímenes de guerra. Sin embargo, un análisis de los *travaux préparatoires* de dicho artículo, muestra que los únicos Estados que habían referido la cuestión de los autores de crímenes internacionales, la antigua URSS y algunos de sus estados satélites, la habían vinculado a la de los mercenarios extranjeros. Los terceros intervinientes consideran curioso que el CICR haya interpretado el artículo 6.5, en el sentido de que establecía la exclusión únicamente para los criminales de guerra y no para otros crímenes internacionales en este ámbito, ya que la declaración de la antigua URSS, en la que el CICR se había basado, había previsto específicamente el enjuiciamiento de los autores de crímenes contra humanidad y de crímenes contra la paz. Era difícil de determinar qué argumentos podrían justificar la exclusión del ámbito de aplicación de la amnistía de los criminales de guerra pero no de los autores de genocidio y crímenes contra humanidad. Por otra parte, el CICR se refirió a los casos de conflictos no internacionales, tales como los de Sudáfrica, Afganistán, Sudán y Tayikistán. Sin embargo, las amnistías asociadas a esos conflictos habían incluido al menos un crimen internacional.

109. Los intervinientes señalan las dificultades en la negociación de las disposiciones de los tratados relativas a la amnistía (hacen referencia a la Conferencia de Roma de 1998 sobre la creación de la Corte Penal Internacional (CPI); las negociaciones en la Convención Internacional contra las desapariciones forzadas y la Declaración de la Reunión de alto nivel de la Asamblea General sobre el Estado de Derecho en el plano nacional e internacional de 2012). Estas dificultades confirman la falta de consenso entre los Estados sobre esta cuestión.

110. Los intervinientes invocan una línea jurídico-doctrinal⁸ sobre amnistía que sostiene que desde la Segunda Guerra Mundial, los Estados

8. Los intervinientes se basan en las siguientes fuentes: Louise Mallinder, *Amnesty, Human Rights and Political Transitions, Bridging the Peace and Justice Divide* (Hart Publishing 2008); Louise Mallinder, “Amnesties’ Challenge to the Global Accountability Norm? Interpreting Regional and International Trends in Amnesty Enactment”, in Francesca Lessa and Leigh A. Payne, *Amnesty in the Age of Human Rights Accountability* (CUP 2012); Tricia D. Olsen, Leigh A. Payne and Andrew G. Reiter, *Transitional Justice in Balance, Comparing Processes, Weighing Efficacy* (United States Institute of Peace Press 2010); Leslie Vinjamuri and Aaron P. Boesnecker, *Accountability and Peace Agreements, Mapping trends from 1998 to 2006* (Geneva: Center for Humanitarian Dialogue, 2007).

han recurrido cada vez más a las leyes de amnistía. Aunque el número de nuevas leyes de amnistía que excluyen los crímenes internacionales han aumentado, también han aumentado el número de leyes que incluyen estos delitos. Las amnistías fueron la forma de justicia transicional más utilizada. El uso de amnistías dentro de los acuerdos de paz entre 1980 y 2006 se ha mantenido relativamente estable.

111. A pesar de que diversos tribunales tanto internacionales como regionales habían adoptado la opinión de que las amnistías concedidas para crímenes internacionales estaban prohibidas por el derecho internacional, su autoridad se había visto debilitada por la existencia de contradicciones en pronunciamientos judiciales sobre el alcance de la prohibición y los delitos a los que se refería. Por ejemplo, mientras que la Corte Interamericana de Derechos Humanos había adoptado en el asunto *Barrios Altos* de 2001 la posición de que todas las disposiciones sobre amnistía eran inadmisibles porque trataban de impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones de los derechos humanos, el Presidente de dicho tribunal y otros cuatro magistrados, en el asunto *Masacres de El Mozote contra El Salvador*, habían matizado dicha posición al aceptar que, incluso cuando se cuestionaban violaciones graves de los derechos humanos, la obligación de enjuiciar no era absoluta y tenía que buscar un equilibrio con los requisitos para la paz y la reconciliación en periodo de posguerra.

112. Por otra parte, una serie de tribunales supremos nacionales han confirmado las leyes de amnistía de sus respectivos países, ya que dichas leyes contribuyen a la consecución de la paz, de la democracia y de la reconciliación. Los intervinientes citan los siguientes ejemplos: la decisión del Tribunal Supremo español en el juicio del juez Garzón en febrero de 2012; la decisión del Tribunal Constitucional de Uganda confirmando la constitucionalidad de la Ley de Amnistía de 2000; la decisión del Tribunal Supremo de Brasil de abril de 2010, que denegó revocar la Ley de Amnistía de 1979; y la decisión del Tribunal Constitucional Sudafricano en el asunto AZAPO, que confirmó la constitucionalidad de la Ley para la Promoción y Reconciliación de la Unidad Nacional de 1995, la cual preveía un amplio ámbito de aplicación de la amnistía.

113. Los intervinientes aceptan que la concesión de amnistías puede, en determinados casos, conducir a la impunidad de los responsables de la violación de derechos humanos fundamentales, perjudicando los intentos de salvaguardar dichos derechos. Sin embargo, motivos políticos pueden aconsejar la posibilidad de conceder amnistías cuando éstas representan la única manera de salir de dictaduras violentas y de conflictos interminables. Los intervinientes se declaran en contra de la prohibición total de las

amnistías y son partidarios de un enfoque más matizado a la hora de abordar la cuestión de la concesión de amnistías.

3. Valoración de la Gran Sala

a. Sobre la cuestión de la identidad de los delitos por los que el demandante fue procesado

114. En el asunto *Zolotukhin*, el Tribunal consideró que debía entenderse que el artículo 4 del Protocolo núm. 7 prohibía procesar o juzgar a una persona por una segunda “infracción” en la medida en que esta tuviese su origen en unos hechos idénticos o en unos hechos que fueran esencialmente los mismos (véase *Sergey Zolotukhin contra Rusia* [GS], núm. 14939/03, § 82, TEDH 2009).

115. En el presente caso, el demandante fue acusado en los dos procedimientos de los siguientes delitos:

(a) De haber matado a S.B. y a V.B., y de haber herido gravemente a Sl.B. el 20 de noviembre de 1991;

(b) De haber matado a N.V. y a Ne.V. el 10 de diciembre de 1991.

116. Por lo tanto, en la medida en que ambos procedimientos conciernen los cargos mencionados, el demandante fue procesado dos veces por los mismos delitos.

b. La naturaleza de las decisiones adoptadas en el primer procedimiento

117. Existen dos situaciones distintas en cuanto a los cargos formulados contra el demandante tanto en el primer como en el segundo procedimiento.

118. En primer lugar, el 25 de enero de 1996, el fiscal retiró los cargos con relación a las muertes de N.V. y de Ne.V. el 10 de diciembre de 1991 (véanse párrafos 120 y 121 *infra*).

119. En segundo lugar, mediante una decisión adoptada por el Tribunal del Condado de Osijek el 24 de junio de 1997, en base a la Ley de Amnistía General, se puso fin al procedimiento relativo a las muertes de S.B. y de V.B., y a las graves heridas infligidas a Sl.B. el 20 de noviembre de 1991 (véanse párrafos 122 *et seq. infra*).

i. La retirada de los cargos por el fiscal

120. El Tribunal ya ha declarado que la retirada de la acción penal por el fiscal no equivale a una condena o a una absolución y que por tanto, el artículo 4 del Protocolo núm. 7 no es de aplicación en dicha situación (véase *Smirnova y Smirnova contra Rusia* (dec.), núms. 46133/99 y 48183/99, 3 de octubre de 2002; y *Harutyunyan contra Armenia* (dec.), núm. 34334/04, 7 de diciembre de 2006).

121. Por lo tanto, la retirada de la acción penal por el fiscal en relación a las muertes de N.V. y de Ne.V., no se encuadra en el ámbito de aplicación del artículo 4 del Protocolo núm. 7 del Convenio. Por consiguiente, esta parte de la queja es incompatible *ratione materiae*.

ii. *La finalización de los procedimientos en virtud de la Ley de Amnistía General*

122. En cuanto a los cargos restantes (por las muertes de V.B. y de S.B., y las graves heridas infligidas a Sl.B.), se puso fin al primer procedimiento penal iniciado contra el demandante por aplicación de la Ley de Amnistía General.

123. El Tribunal deberá comenzar su valoración relativa a la decisión de 24 de junio de 1997, determinando si el artículo 4 del Protocolo núm. 7 es de aplicación en las circunstancias particulares del presente caso, en el que al demandante se le concedió una amnistía incondicional con respecto a los actos que constituían graves violaciones de los derechos humanos.

α. *La situación en el ámbito del Convenio*

124. El Tribunal señala que las alegaciones realizadas en los procedimientos penales contra el demandante incluían la muerte y la producción de lesiones graves a civiles y que por tanto, afectan a su derecho a la vida garantizado en el artículo 2 del Convenio y, sin duda, a su derecho en virtud del artículo 3 del Convenio. A este respecto, el Tribunal reitera que los artículos 2 y 3 figuran entre los artículos primordiales del Convenio y consagran algunos de los valores fundamentales de las sociedades democráticas que forman el Consejo de Europa (véase, entre otros, *Andronicou y Constantinou contra Chipre*, 9 de octubre de 1997, § 171, *Informes 1997-VI*; y *Solomou y otros contra Turquía*, núm. 36832/97, § 63, 24 de junio de 2008).

125. Las obligaciones de proteger el derecho a la vida en virtud del artículo 2 del Convenio y de garantizar protección contra los malos tratos en virtud del artículo 3 del Convenio, puestas en relación con el deber general del Estado impuesto por el artículo 1 del Convenio de reconocer “a toda persona que esté bajo su jurisdicción, los derechos y libertades definidos en el Convenio”, también requieren, como consecuencia, que haya alguna forma de investigación oficial efectiva cuando las personas hayan perdido la vida como consecuencia del uso de la fuerza (véase, *mutatis mutandis*, *McCann y otros contra el Reino Unido*, 27 de septiembre de 1995, § 161, Serie A. núm. 324; y *Kaya contra Turquía*, 19 de febrero de 1998, § 86, *Informes 1998-I*), o de malos tratos (véase, por ejemplo, *El Masri contra Antigua República Yugoslava de Macedonia* [GS], núm. 39630/09, § 182, TEDH 2012). El propósito esencial de dicha investigación es garantizar la

aplicación efectiva de las leyes nacionales que protegen el derecho a la vida y asegurar la responsabilidad de los autores.

126. El Tribunal ya ha declarado que, cuando un agente del Estado es acusado de delitos de tortura o malos tratos, es de la mayor importancia que las procedimientos penales y la condena no estén sometidos a prescripción y que la concesión de la amnistía o indulto no sea permisible (véase *Abdülsamet Yaman contra Turquía*, núm. 32446/96, § 55, 2 de noviembre de 2004; *Okkali contra Turquía*, núm. 52067/99, § 76, 17 de octubre de 2006; y *Yeşil y Sevim contra Turquía*, núm. 34738/04, § 38, 5 de junio de 2007). En particular, el Tribunal ha considerado que las autoridades nacionales no deben dar la impresión de que estén dispuestas a permitir que dicho trato quede impune (véase *Egmez contra Chipre*, núm. 30873/96, § 71, TEDH 2000-XII; y *Turan Cakir contra Bélgica*, núm. 44256/06, § 69, 10 de marzo de 2009). En su sentencia sobre el asunto *Ould Dah contra Francia* ((dec.), núm. 13113/03, TEDH 2009), el Tribunal declaró también en referencia al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y al TPIY, que una amnistía era generalmente incompatible con el deber de los Estados de investigar actos tales como tortura y que la obligación de perseguir a los criminales por lo tanto, no se debe ver perjudicada mediante la concesión de impunidad al agresor en forma de una ley de amnistía que podría ser considerada contraria al derecho internacional.

127. La obligación de los Estados de perseguir actos de tortura o asesinato se encuentra asentada en la jurisprudencia de este Tribunal. La jurisprudencia del Tribunal afirma que la concesión de una amnistía a los autores de las muertes de civiles o de malos tratos a los mismos es contraria a las obligaciones del Estado en virtud de los artículos 2 y 3 del Convenio, ya que podría obstaculizar la investigación de tales actos y necesariamente conduciría a la impunidad de los responsables. Tal resultado pondría en riesgo la finalidad de protección garantizada en virtud de los artículos 2 y 3 del Convenio y podría hacer que las garantías relativas al derecho de toda persona a la vida y al derecho de no ser sometido a malos tratos fueran ilusorias. El objeto y finalidad del Convenio como instrumento para la protección de los seres humanos, exigen que sus disposiciones sean interpretadas y aplicadas de forma que la protección sea práctica y efectiva (véase *McCann y otros*, citada, § 146).

128. Si bien el presente caso no se refiere a presuntas violaciones de los artículos 2 y 3 del Convenio, sino del artículo 4 del Protocolo núm. 7, el Tribunal reitera que el Convenio y sus Protocolos deben ser leídos en conjunto, e interpretados de tal manera que promueva la coherencia interna y la armonía entre sus distintas disposiciones (véase *Stec y otros contra el Reino Unido* (dec.) [GS], núm. 65731/01 y 65900/01, § 48, TEDH 2005-X; y

Austin y otros contra el Reino Unido [GS], núms. 39692/09, 40713/09 y 41008/09, § 54, TEDH 2012). Por lo tanto, las garantías previstas en virtud del artículo 4 del Protocolo núm. 7 y las obligaciones de los Estados en virtud de los artículos 2 y 3 del Convenio, deben ser consideradas como parte de un todo.

β. La situación en el ámbito del derecho internacional

129. El Tribunal debe tener en cuenta el desarrollo del derecho internacional en esta área. El Convenio y sus Protocolos no pueden interpretarse de forma aislada, sino que deben ser interpretados de conformidad con los principios generales del derecho internacional del que forma parte. Tal y como prescribe el artículo 31.3 c) de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, la interpretación de un tratado debe tener en cuenta, “toda norma pertinente de derecho internacional aplicable en las relaciones entre las partes” y en particular, las normas relativas a la protección internacional de los derechos humanos (véase *Al-Adsani contra el Reino Unido* [GS], núm. 35763/97, § 55, TEDH 2001-XI; *Demir y Baykara contra Turquía* [GS], núm. 34503/97, § 67, TEDH 2008; *Saadi contra el Reino Unido* [GS], núm. 13229/03, § 62, TEDH 2008; *Rantsev contra Chipre y Rusia*, núm. 25965/04, §§ 273 y 274, TEDH 2010 (extractos); y *Nada contra Suiza* [GS], núm. 10593/08, § 169, TEDH 2012).

130. El Tribunal toma nota de las observaciones de la Sala, según las cuales, “hay una opinión creciente de que la concesión de la amnistía con respecto a “crímenes internacionales” – entre los que se incluyen crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y genocidio – está prohibida por el derecho internacional” y que “esta interpretación se extrae de las normas consuetudinarias de derecho internacional humanitario, de los tratados en materia de derechos humanos, así como de las decisiones de los tribunales internacionales y regionales, y de la práctica emergente de los Estados, por cuanto ha habido una creciente tendencia por parte de los tribunales internacionales, regionales y nacionales de anular amnistías generales aprobadas por los gobiernos”.

131. Debe tenerse en cuenta que hasta el momento, ningún tratado internacional prohíbe expresamente la concesión de una amnistía con respecto a la comisión de graves violaciones de los derechos humanos fundamentales. Si bien es cierto que el artículo 6.5 del Protocolo adicional II a los Convenios de Ginebra, relativo a la protección de las víctimas de conflictos armados no internacionales, establece que “a la cesación de las hostilidades, las autoridades en el poder procurarán conceder la amnistía más amplia posible a las personas que hayan tomado parte en el conflicto

armado...”, la interpretación de dicha disposición, dada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, excluye de su ámbito de aplicación a los autores de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad (véase párrafo 66 *supra*, sentencia del asunto *Masacres de El Mozote y lugares aledaños contra El Salvador*, § 286). El fundamento de dicha conclusión, de acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se encuentra en las obligaciones de los Estados en virtud del derecho internacional, de investigar y perseguir los crímenes de guerra. La Corte Interamericana ha determinado que, por lo tanto, “las personas sospechosas o acusadas de haber cometido crímenes de guerra no pueden ser objeto de una amnistía”. La misma obligación de investigar y perseguir existe con respecto a las violaciones graves de los derechos humanos y por lo tanto, las amnistías previstas en virtud del artículo 6.5 del Protocolo adicional II a los Convenios de Ginebra tampoco son aplicables a tales actos.

132. La posibilidad de que un Estado conceda una amnistía con respecto a las violaciones graves de los derechos humanos puede verse limitada por los tratados en los que el Estado sea parte. Hay varias convenciones internacionales que establecen el deber de perseguir los delitos definidos en los mismos (véase los Convenios de Ginebra de 1949 para la Protección de las Víctimas de los Conflictos Armados y sus Protocolos adicionales, en particular el artículo 3 común de los Convenios de Ginebra, artículos 49 y 50 del I Convenio para aliviar la suerte que corren los heridos y los enfermos de las fuerzas armadas en campaña; los artículos 50 y 51 del II Convenio para aliviar la suerte que corren los heridos, los enfermos y los náufragos de las fuerzas armadas en el mar; los artículos 129 y 130 del III Convenio relativo al trato debido a los prisioneros de guerra; y los artículos 146 y 147 del IV Convenio relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra; véase también el Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra de 1977, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional, artículos 4 y 13; la Convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio, artículo V; y la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes).

133. La Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad, proscribida la prescripción con respecto a los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.

134. Varios organismos internacionales han emitido resoluciones, recomendaciones y comentarios relativos a la impunidad y a la concesión de una amnistía con respecto a graves violaciones de los derechos humanos, sosteniendo en general que las amnistías no pueden concederse a quienes hayan cometido tales violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario (véanse párrafos 45, 47 a 49, 51 a 53, y 56 a 58 *supra*).

135. En sus sentencias, varios tribunales internacionales han confirmado que las amnistías son inadmisibles cuando tratan de evitar la investigación y condena a los responsables de graves violaciones o actos que constituyan crímenes en virtud del derecho internacional (véanse párrafos 54 y 59 a 68 *supra*).

136. A pesar de que la redacción del artículo 4 del Protocolo núm. 7 restringe su aplicación al nivel nacional, debe señalarse que el alcance de algunos instrumentos internacionales se extiende a un nuevo juicio en Estado distinto o ante un tribunal internacional. Por ejemplo, el artículo 20 de Estatuto de la Corte Penal Internacional contiene una excepción explícita al principio *non bis in idem*, ya que permite la persecución penal de una persona que ya ha sido absuelta en relación con el delito de genocidio, crímenes contra la humanidad o crímenes de guerra, si la finalidad del procedimiento ante el primer tribunal fue sustraer al acusado de su responsabilidad penal por crímenes que caen bajo el ámbito de competencia de la Corte Penal Internacional.

137. El Tribunal toma nota del argumento de los intervinientes acerca de la ausencia de consenso entre los Estados a nivel internacional en lo que respecta a la prohibición absoluta de conceder una amnistía con relación a graves violaciones de los derechos humanos, y en particular, de los previstos en los artículos 2 y 3 del Convenio. Se expresó la opinión de que la concesión de amnistías como una herramienta para poner fin a los conflictos prolongados podría dar resultados positivos (véanse las alegaciones de los intervinientes en los párrafos 108 a 113 *supra*).

138. Asimismo, el Tribunal señala la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en particular los asuntos ya citados, de *Barrios Altos*, *Gomes Lund y otros*, *Gelman*, y *Masacres de El Mozote y lugares aledaños*, en los que dicho tribunal adoptó una postura más firme, y basándose en sus previas conclusiones así como en las conclusiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los órganos de las Naciones Unidas y otros órganos universales y regionales para la protección de los derechos humanos, declaró que las amnistías no eran aceptables con respecto a las graves violaciones de los derechos humanos fundamentales, puesto que tal amnistía perjudicaría gravemente el deber de los Estados de investigar y condenar a los autores de dichos actos (véase *Gelman*, § 195; y *Gomes Lund y otros*, § 171, ambas citadas anteriormente). La Corte ha enfatizado que este tipo de amnistías son contrarias a los derechos reconocidos por el derecho internacional humanitario (véase *Gomes Lund y otros*, § 171).

γ. Conclusión del Tribunal

139. En el presente caso, al demandante se le concedió la amnistía por actos tales como el asesinato de civiles y los daños corporales graves a un niño, los cuales se pueden considerar como violaciones graves de derechos humanos fundamentales. El Tribunal del Condado subrayó en su razonamiento los méritos militares del interesado. Existe la tendencia creciente en derecho internacional de considerar estas amnistías como inaceptables porque son incompatibles con la obligación de los Estados reconocida universalmente de perseguir y condenar las graves violaciones de los derechos humanos. Incluso si se aceptara que las amnistías son posibles bajo determinadas circunstancias, como un proceso de reconciliación y/o una forma de compensación a las víctimas, la amnistía concedida al demandante en el presente caso seguiría sin ser aceptable ya que no hay nada que indique que tales circunstancias se hayan producido.

140. El Tribunal considera que al formular un nuevo escrito de acusación contra el demandante y condenarlo por crímenes de guerra contra la población civil, las autoridades croatas actuaron en cumplimiento tanto de las obligaciones establecidas en los artículos 2 y 3 del Convenio como de los requisitos y recomendaciones de los instrumentos y mecanismos internacionales ya mencionados.

141. En vista de lo anterior, el Tribunal concluye que el artículo 4 del Protocolo núm. 7 del Convenio no es aplicable a las circunstancias del presente caso.

POR ESTOS MOTIVOS, EL TRIBUNAL

1. *Declara* inadmisibles, por unanimidad, la queja planteada en virtud del artículo 4 del Protocolo núm. 7 del Convenio con respecto al derecho del demandante a no ser juzgado o condenado dos veces en relación con los cargos relativos a las muertes de N.V., y Ne.V., retirados por el fiscal el 25 de enero de 1996;
2. *Declara*, por unanimidad, que no ha habido violación del artículo 6 del Convenio;
3. *Declara*, por dieciséis votos contra uno, que el artículo 4 del Protocolo núm. 7 del Convenio no es aplicable respecto a los cargos relativos a las muertes de S.B. y V.B., y a la lesiones graves infligidas a Sl.B.

...